

EL RÉGIMEN PARLAMENTARIO CANADIENSE Y SUS CARACTERÍSTICAS

A lo largo de más de siglo y medio de existencia, desde la conformación de su primer Parlamento en 1867, Canadá ha cimentado un esquema operativo de gobierno bastante preciso y funcional que se apoya en los siglos de operación y experiencia del parlamentarismo británico por medio del diseño Westminster. Así, justamente desde sus primeras manifestaciones, la gobernabilidad¹ de este vasto territorio en el extremo norte del continente americano ha fluído de generación en generación gracias a los sólidos marcos jurídicos y políticos que han sustentado su ejecución desde el noroeste de la vieja Europa, de manera particular en las islas británicas.

De este modo, la instrumentación de normas de carácter judicial y de gobernabilidad puestas en marcha en territorio canadiense desde las primeras colonias inglesas en el siglo xvii en el extremo oriental del país —las cuales, por cierto, estuvieron en pugnas permanentes con las colonias francesas establecidas décadas antes en esos mismos parajes— sirvió como referencia para toda la región una vez concluida la Guerra de los Siete Años (1756-1763), en la que Gran Bretaña derrotaría a Francia, obligándola a ceder sus territorios en el extremo norte de América después de la firma del Tratado de París de 1763.

Por ello, a partir de la segunda mitad del siglo xviii, las leyes, usos y costumbres de la Gran Bretaña se impusieron en toda la zona, dando paso al asentamiento de las instituciones británicas sobre la política de todas las colonias existentes en el actual Canadá. Es por eso que, precisamente, después de la derrota francesa ante el linaje de la Casa Estuardo, con George iii como

¹ Entiéndase por gobernabilidad a la creación y consolidación de mecanismos capaces de permitir la operación del gobierno. Por ello, una administración gubernamental puede ser considerada capaz si posee las facultades para gobernar su sociedad, además de las herramientas suficientes para la resolución de los distintos problemas que enfrente. Para mayor información acerca de los debates en torno a la gobernabilidad, la nueva gestión pública y la gobernanza, véase Serna de la Garza (2010).

monarca, el diseño institucional del Reino Unido fue expandiendo su desarrollo e influencia en el entretejido social norteamericano.

De este modo, la práctica social protestante anglosajona de asistir a reuniones en las comunidades para desde ahí discutir y resolver las problemáticas cotidianas que atañían a la población encontraría en las comarcas canadienses precoces hábitos democráticos de manera casi involuntaria, en forma similar a lo sucedido en las trece colonias de lo que hoy es Estados Unidos.

Estos hábitos democráticos canadienses cristalizaron en la creación de su primera Asamblea en la provincia de Nueva Escocia durante la segunda mitad del siglo XVIII, de manera concreta en 1758. Si bien la práctica parlamentaria organizada comenzó a desarrollarse allí una década antes, con la inauguración del primer gobierno colonial de Nueva Escocia (Tidridge, 2011: 30), lo cierto es que fue hasta 1758 cuando la Asamblea gozó del reconocimiento pleno por parte de la Corona británica.

A partir de ese momento, la Asamblea de Nueva Escocia contó con un vicegobernador, un Consejo Ejecutivo y una Cámara baja elegida directamente por algunos ciudadanos. Cabe agregar que si bien se le negó el voto a la gran mayoría de la población, de cualquier forma fue la primera institución parlamentaria puesta en marcha en el país, y de hecho en todo el continente americano (Nova Scotia Legislature, 2018). No sería sino hasta el siglo XIX cuando se estableció en Nueva Escocia un Consejo con funciones similares a la Cámara de los Lores británica, pero éste fue abolido en el siglo XX.

Por otra parte, es necesario explicar que el desarrollo del parlamentarismo canadiense no podría entenderse sin la influencia del movimiento independentista surgido en las trece colonias en 1776, ya que ese acontecimiento generó temor en la Corona británica ante la posible expansión del sentimiento emancipador a toda Norteamérica. Aunado a lo anterior, la llegada de decenas de miles de estadounidenses a territorios de Nueva Escocia, Nueva Brunswick y Quebec, que se encontraban inconformes con la independencia de su país respecto de Gran Bretaña, creó nuevas presiones a las autoridades locales, que en muchos sentidos fueron rebasadas por la creciente demanda de servicios y apoyos del gobierno.

Estas presiones fueron más evidentes cuando de 1775 a 1780 llegaron treinta y cinco mil estadounidenses a Nueva Escocia, otros trece mil a Nueva Brunswick y nueve mil más a Quebec (Brown, 2002). Dicha colonización masiva de territorios en Canadá obligó a las autoridades británicas a recon-

figurar su división y su organización políticas. Debido a ello, se determinó desde Londres crear una Asamblea en Nueva Brunswick en 1784 y otra más en la provincia de Canadá en 1791, además de que se realizó una nueva delimitación territorial en el alto y el bajo Canadá, Ontario y Quebec, respectivamente (Lower, 1973: 52-58).

Esto último sucedió en el marco de la Ley de 1791, que otorgó soberanía cultural a franceses y británicos divididos en el alto y el bajo Canadá. También esta Ley determinó que los territorios canadienses gozarían de un sistema político representativo al estilo Westminster, integrado por una Cámara de los Comunes surgida del voto de la población con propiedades, y una Cámara alta nombrada por cada gobernador, el cual a su vez debía gozar de la aprobación de la propia Asamblea. Estas asambleas canadienses estarían facultadas para crear y votar sus propias leyes, mismas que se someterían a ratificación por parte de la Cámara de los Comunes en Londres.

En general, se considera que la Ley de 1791, conocida en la historia británica como *The Constitutional Act of 1791*, refinó el sistema de gobierno colonial que ya había operado en las colonias británicas del Atlántico desde tiempo atrás. Esto es, si bien ya existían asambleas electas, éstas convivían con órganos de gobierno creados por la Corona para ejercer su poder de manera vertical. También era cierto que los canadienses podían regular, vivir sus vidas y hasta destinar sus impuestos a su propio beneficio local, pero aún podrían ser vetados por parte de los órganos de gobierno supranacionales creados por el monarca en turno, y más todavía: toda ley aprobada por las asambleas en las provincias canadienses se encontraba sujeta a ratificación o rechazo por el Parlamento británico en cualquiera de sus dos cámaras (Lower, 1973: 57-58).

Por ello, si bien la guerra de 1812 con Estados Unidos significó un reto para las autoridades canadienses y el gobierno británico, no fue sino hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando la Corona percibió la amenaza que representaba continuar ejerciendo un control absoluto sobre las asambleas canadienses. El motivo fue la guerra civil estadounidense (1861 a 1865), que puso en evidencia las fallas en el reparto de poder en Estados Unidos, después de que los estados hicieran evidente su fuerza e influencia frente al gobierno central de Washington.

Esta situación ya la habían estudiado en diversos momentos las autoridades británicas en sus colonias en Canadá, siendo su manifestación más clara

el conocido “Reporte Durham”.² De este último emanaron una serie de recomendaciones al gobierno de Londres para otorgar mayores márgenes de maniobra a las autoridades canadienses y así dotarlas de capacidad de acción y respuesta rápidas ante las crecientes demandas sociales que surgían con el paso de los años. Es por eso que la guerra civil estadounidense puede considerarse el acontecimiento que terminó por obligar a la Corona británica a otorgar la autogestión de gobierno a sus territorios al norte del continente americano.

Así, después de una serie de reuniones celebradas entre 1864 y 1866, de las cuales la más conocida es la Conferencia de Quebec de 1865, un grupo de hombres de elevada posición económica presentaron ante la reina Victoria un documento en el que planteaban alcanzar la unión federal entre los territorios británicos de América del Norte (Nueva Brunswick, Nueva Escocia y las provincias del alto y el bajo Canadá, Ontario y Quebec).

Por ello, después de considerar lo planteado en el Reporte Durham, el Parlamento británico aprobó la solicitud y la turnó para su valoración final a la Corona, que en la persona de la reina Victoria otorgó su “Asentimiento real de autonomía y conformación de un nuevo dominio unificado por las regiones de Nueva Escocia, Nueva Brunswick y las provincias del alto y bajo Canadá bajo el nombre de Canadá”. Esta promulgación, conocida como *Constitutional Act of 1867* o *The British North America Act, 1867*, estableció un modelo de gobierno de tipo federal que dotaba, en un principio, de un gran poder al gobierno central en detrimento de los provinciales. Lo anterior, sobre todo para ofrecer posibilidades de reacción inmediata al gobierno federal frente a amenazas o situaciones extremas surgidas desde Estados Unidos.

Dicho mandato se hizo público el 1° de julio de 1867, lo que significó el nacimiento oficial de Canadá como un territorio unificado y autónomo con capacidad de autogestión limitada. Esto último, ya que de cualquier manera las leyes emanadas del nuevo Parlamento canadiense se encontraban sujetas a la aprobación de sus homólogos en Londres.

² Este documento, elaborado en 1839 por John George Lambton (Lord Durham), gobernador general de América del Norte, recomendó, entre otras cosas, otorgar mayor independencia a las provincias canadienses respecto de su metrópoli con el fin de alcanzar la autogestión de sus recursos. Del mismo modo, sugirió conferirles el derecho de elegir a sus gobernantes y autoridades mediante elecciones parlamentarias, pero no recomendó la facultad de veto que mantenían las autoridades supranacionales nombradas desde Londres. Asimismo, propuso llevar a la práctica los usos y costumbres políticas británicas, lo cual significaba permitir y estimular al mismo tiempo la formación de partidos políticos y aplicar métodos de elecciones desarrollados en Gran Bretaña desde siglos atrás (*Canada History*, 2018).

De esta forma vio la luz el modelo parlamentario canadiense a través de sus primeras elecciones federales llevadas a cabo en julio de 1867 según el modelo británico *first past the post* de mayoría relativa, vigente en Gran Bretaña. Al igual que en el modelo británico, el recién creado sistema político canadiense determinó la conformación de una Cámara alta o Senado que, a diferencia de sus contrapartes de la Cámara de los Comunes, no sería electa sino nombrada por el primer ministro.

De este modo, en un discurso que expresa la muy temprana tendencia conservadora del sistema monárquico constitucional canadiense, su primer ministro inaugural, un aristócrata nacido en Escocia, Sir John Alexander MacDonald, declaró abiertamente que el Senado no debía ser electo, ya que estaba destinado a convertirse en un lugar para la sobria reflexión capaz de frenar los “excesos democráticos” en la Cámara de los Comunes (*Parli.ca. The Dictionary of Canadian Politics*, 2018).

Como ha podido observarse, la absoluta alineación al sistema político británico expresada por los padres fundadores canadienses no es tan diferente de la que manifestaron en aquellos años sus contrapartes escocesas, galesas y norirlandesas en la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña. De hecho, para el caso de Canadá, el sistema británico garantizaba de una u otra forma mantener y extender las canonjías de clase de estos grupos encumbrados en el poder. Así, poner en marcha el modelo Westminster en su versión tradicional canadiense significó mantener e institucionalizar el poder al concentrarlo en su Cámara baja, tal y como había sucedido durante siglos en las islas británicas, ponderándose ante todo su lealtad al monarca en turno.

Con el paso de los años, la incorporación de nuevas provincias y territorios a Canadá³ fue ensanchando la influencia del Parlamento, al otorgarles representatividad a los ciudadanos de ese vasto país transcontinental. De esa forma, mediante la adopción de mecanismos del sistema Westminster, el parlamentarismo federal canadiense buscó garantizar y defender la legalidad y la estabilidad política a partir de una serie de viejos procedimientos de origen británico, entre los que destaca el “discurso del trono”, con el cual se inaugura cada ejercicio parlamentario para aprobar el presupuesto del año en curso. Cabe agregar que este acto lo encabeza el gobernador o goberna-

³ Manitoba en 1870, Columbia Británica en 1871, la Isla del Príncipe Eduardo en 1873, Saskatchewan y Alberta en 1905, Terranova y Labrador en 1949, más los territorios del Noroeste en 1870, Yukón en 1898 y Nunavut en 1999.

dora general como representante directo de la Corona británica. También se identifica la existencia de un *speaker* (o portavoz), el cual procede de la Cámara de los Comunes y es el enlace oficial entre el Senado canadiense y la Corona británica. El *speaker* es el responsable de mantener el orden y dirigir los debates entre los diputados del partido gobernante y los de oposición, siempre buscando garantizar el mayor respeto posible.

Asimismo, pueden identificarse en el modelo parlamentario canadiense las reminiscencias británicas a través de la división del territorio en circunscripciones; la organización y conformación de partidos políticos, el sistema electoral *first past the post* para elegir a los miembros de la Cámara de los Comunes, la elección del líder del partido con mayor cantidad de curules en la Cámara baja como primer ministro, un Senado que es designado por ese primer ministro y ratificado por el gobernador general, y el nombramiento del gobernador general también a través del primer ministro, quien es el encargado de proponerlo a la Corona británica.

Otras características de origen británico son la conformación de un gabinete de gobierno emanado de entre los diputados electos en la Cámara de los Comunes, regularmente integrantes del mismo partido gobernante; el juego político de los partidos de oposición alrededor de la agrupación partidista que obtenga la primera minoría; el escrutinio detallado de uso de los recursos públicos por parte del gobierno y su respuesta en los debates parlamentarios a la oposición, así como la crítica permanente de la oposición respecto de las nuevas leyes aprobadas durante los ejercicios parlamentarios.

Los anteriores son sólo algunos elementos visibles del entramado y complejo sistema parlamentario canadiense, cuyas expresiones más operativas comprenden su sistema de partidos políticos, su sistema bicameral y las amplias atribuciones conferidas al primer ministro en turno, mismas que se extienden cuando hay un gobierno de mayoría. En tal sentido, una parte considerable de este capítulo se centrará en analizar las estrategias parlamentarias aplicadas por Stephen Harper cuando fungió como primer ministro, de febrero de 2006 a noviembre de 2015.

Es preciso señalar que durante dicho lapso, Harper logró pasar de ser el unificador de los partidos conservadores canadienses a ser uno de los primeros ministros con mayor poder en la historia moderna de su país, esto gracias a su conocimiento y dominio del sistema parlamentario, mismo que hizo posible su victoria en tres procesos electorales consecutivos. Durante sus años

como cabeza del Poder Ejecutivo,⁴ Harper no sólo logró desarticular los esfuerzos de la oposición para deponerlo, sino que incluso sus estrategias parlamentarias orillaron a sus adversarios a votar en favor de sus propuestas conservadoras, aunque éstas fueran contradictorias con sus propios estatutos partidistas y con su papel de partidos de oposición. “El gobierno de Harper pasó por encima de la oposición; muchos expertos lo señalaron como el campeón de los hechos basados en políticas en lugar de las políticas basadas en hechos” (Harris, 2015: 104), en algo que podría identificarse como la antecámara de la posverdad, puesta de moda en la era Trump pocos años después.

Lo más sorprendente de todo esto es que buena parte de la gestión de Stephen Harper como primer ministro la enfrentó con un gobierno de minoría (2006 a 2011), enmascarando, mediante manipulaciones legislativas habilidosas, una agenda política compleja (Johnson, 2011: 15) que abarcó desde debilitar y deponer a líderes de otras agrupaciones partidistas opositoras, hasta desarticular desde el poder la posibilidad de conformar un gobierno de coalición, el cual, como se ha visto en este libro, es una figura perfectamente legal puesta en marcha en toda Gran Bretaña de acuerdo con el sistema Westminster desde hace siglos; no obstante en Canadá esta figura de gobierno de coalición no ha tenido cabida, principalmente por el carácter profundamente conservador de su versión Westminster, que es sin lugar a dudas la más estrecha y menos progresista de todos los modelos parlamentarios inspirados en el paradigma británico, tal y como lo expondremos a continuación.

Orígenes parlamentarios y partidos políticos en Canadá

Con el nacimiento de Canadá como ente político autónomo en 1867 surgió también su sistema parlamentario de carácter federal, que tenía como meta principal alcanzar y mantener la gobernabilidad en sus provincias; sin embargo, es necesario resaltar el carácter marcadamente conservador y oligárquico que definió este alumbramiento, ya que, como se mencionó, la Ley

⁴ Es preciso señalar que si bien la monarquía constitucional canadiense reconoce en el monarca británico en turno a su cabeza de Estado, en los hechos, más allá del protocolo, el primer ministro como titular del Poder Ejecutivo es la figura con mayor poder y alcance en el país. Para un análisis más detallado del desarrollo político canadiense desde sus orígenes y hasta la primera década del siglo XXI puede consultarse a Oliver Santín Peña (2014).

Constitucional de 1867 significó la institucionalización y reconocimiento de las elites canadienses como soberanas de sus propios recursos y con capacidad de autogobierno.

Estas mismas elites se congregaron desde el comienzo en dos agrupaciones partidistas: el Partido Liberal-Conservador y el Partido Liberal. Ahora bien, es necesario señalar que los liberal-conservadores eran realmente un grupo de individuos alineados alrededor de la figura del primer ministro Sir John Alexander MacDonald, quien logró aglutinar a políticos liberales en favor de su causa, que era la causa la federalista, debido a la fuerza que podrían alcanzar los anticonfederados si lograban agruparse en un partido político sólido de alcance nacional, ya que éste podría ser capaz de amenazar la unidad recién creada. Pese a ello, un grupo de liberales decidieron mantenerse en su partido y contender en contra del liderazgo de MacDonald en las primeras elecciones de 1867, en que los liberal-conservadores se alzarían con la victoria por un estrecho margen sobre sus contrincantes del Partido Liberal.⁵ Cabe agregar que pese a sus orígenes liberal-conservadores, este primer organismo político gobernante fue considerado en Canadá un partido conservador y así se consolidó con el paso de los años.

Los años siguientes fueron de un dominio marcado del Partido Conservador y su líder MacDonald, quien ocuparía el asiento de primer ministro durante seis gestiones diferentes, todas ellas en el periodo 1867-1891, con un paréntesis de 1873 a 1878, justo cuando los liberales ocuparon la primera magistratura. En general, los periodos de gobierno durante el siglo XIX en Canadá, ya fueran de extracción conservadora o liberal, se concentraron en los mismos objetivos, entre los cuales destacaba consolidar y extender la unidad política y geográfica del país a través de la construcción masiva de líneas de ferrocarril que interconectarán los centros económicos más importantes del vasto territorio.

De este modo, el proyecto unificador de las oligarquías canadienses, centradas en torno a los dos partidos políticos fundadores, fue tomando forma alrededor de objetivos políticos bien definidos. Este dominio alterno de liberales y conservadores en la arena política canadiense se dio gracias a los recursos económicos con los que contaban sus dirigentes, ya que lograron expandir su presencia a nivel federal, y no sólo eso, sino que también consi-

⁵ Los datos y cifras que se presentan en este apartado, relacionados con las elecciones parlamentarias canadienses, pueden revisarse en: Parliament of Canada (2018a).

guieron derrotar a las agrupaciones políticas provinciales que de vez en cuando surgían de manera aislada, en un intento por emanciparse del dominio de las elites.

Para alcanzar este objetivo, el sistema electoral *first past the post* (FPP) resultó ser un instrumento invaluable para las elites partidistas liberal y conservadora canadienses, ya que gracias a este esquema de elecciones impulsado por la burguesía inglesa a principios del siglo XVIII con el objetivo de fortalecer la presencia del Partido *Whig* en la Cámara de los Comunes fue posible anular a las minorías, sin importar que éstas llegaran a representar más del 50 por ciento de los votos. Debe recordarse que lo anterior sucede precisamente porque este sistema se caracteriza por considerar únicamente los sufragios del candidato ganador en las circunscripciones electorales, sin importar su porcentaje. Es decir, si el candidato “A” obtiene el 40 por ciento en el distrito electoral en disputa, el 60 por ciento restante, repartido entre los candidatos “B”, “C” y “D”, deja de ser considerado y desaparece en favor del candidato con la primera mayoría, esto es, el aspirante “A”, sin importar que en realidad la mayoría, ese 60 por ciento, hubiese votado en contra.

Precisamente esta paradoja democrática que estimula la inequidad y crea falsas mayorías ha sido el motivo para que en Gran Bretaña diversas asambleas locales, como la escocesa, la norirlandesa o la galesa, hayan optado por un sistema mixto de mayoría relativa y representación proporcional (Escocia y Gales), en donde además de sufragar por un candidato en particular también se vota por el partido político, lo que brinda la posibilidad de incluir competidores que no hubiesen obtenido un asiento mediante el sistema *first past the post*, pero que al ser registrados en una lista plurinominal logran alcanzarlo, con base en el porcentaje de votos en favor de su partido. Algo similar ocurre en Irlanda del Norte, en donde mediante el complejo sistema *single transferable vote* (o voto único transferible) —que ya se explicó en este libro— el elector elige numéricamente a distintos candidatos de acuerdo con su nivel de preferencia, de modo que al final el aspirante con la mayor suma a su favor gana su curul en la Asamblea.

Desde luego que tenemos que aclarar que el viejo sistema *first past the post* continúa utilizándose en las elecciones generales de Gran Bretaña para integrar la Cámara de los Comunes, ello pese a que la propia Asamblea de Londres, desde su creación en el año 2000, lleva a la práctica un sistema mixto de mayoría relativa y representación proporcional al igual que en Escocia y

Gales. Debe añadirse que lo mismo ocurre en Australia y Nueva Zelanda, que con un sistema tipo Westminster decidieron hace décadas dejar de lado el método de falsas mayorías *first past the post* y optaron por mecanismos más democráticos e incluyentes para elegir su Cámara de los Comunes, como los ya descritos para otras asambleas de la Gran Bretaña. Lo anterior sin considerar que en Australia el Senado también se elige a través del método *single transferable vote*, situación que lo dota de la suficiente legitimidad democrática, si se lo compara con su símil canadiense (Ward, 2014: 192-194). Por su parte, en Nueva Zelanda adoptaron un sistema unicameral, debido a que ahí se eliminó el Senado a mediados del siglo XX por considerarlo un cuerpo innecesario y sin facultades para revisar los trabajos desarrollados previamente por la Cámara baja (Wilson, 2010: 145-146).

Sin embargo en Canadá, a diferencia de los otros modelos Westminster —con excepción, claro está, del Parlamento de Gran Bretaña—, la clase gobernante ha decidido mantener el viejo modelo FPP como un mecanismo de control que frena y contiene a las ideologías y a los partidos políticos emergentes. Lo anterior sucede en primera instancia en el ámbito provincial, y si acaso algún partido político local logra extender su presencia en el plano federal a través de algunas otras provincias, entonces las dificultades se multiplicarán debido a la ausencia de bases sociales, pero sobre todo de dinero, elementos con los que sí cuentan por su parte los partidos políticos fundadores canadienses (liberales y conservadores). Por ello, no es casualidad que en las cuarenta y dos elecciones federales celebradas en Canadá de 1867 a 2015 sólo hayan alcanzado la victoria el Partido Liberal (en veinticuatro ocasiones) y el Partido Conservador (en dieciocho).

Aunado a lo anterior, que el sistema político canadiense niegue la posibilidad de conformar gobiernos de coalición y prefiera mantener gobiernos minoritarios, ya sea de extracción liberal o conservadora, garantiza el duopolio de poder de los partidos fundadores. Esta circunstancia llama la atención si se toma en cuenta, por ejemplo, que desde el siglo XX la práctica de gobiernos coaligados no ha sido excepcional en Gran Bretaña ni mucho menos en Escocia, Gales o Irlanda del Norte, donde, como se ha visto, de hecho no podría concebirse la práctica de gobierno sin coaliciones de por medio. Éstos son sólo algunos elementos que pueden llevarnos a considerar que el sistema Westminster en Canadá no ha evolucionado lo suficiente, como sí lo ha hecho en el resto de los países que comparten el mismo esquema de prácticas parlamentarias.

Quizá la razón principal sea que la clase política gobernante de Canadá es profundamente conservadora más allá de distingos partidistas liberales o conservadores, pues más bien las fracciones han preferido aguardar su turno desde la oposición como primera minoría parlamentaria, la que por cierto han mantenido ambas agrupaciones en cuarenta de las cuarenta y dos legislaturas desde 1867, con las honrosas excepciones de 1993, justo cuando el separatista Bloque Quebequense se erigió como primera minoría en el xxxv Parlamento, y de 2011, cuando el Partido Neodemócrata hizo lo propio en el xli Parlamento; empero, es un hecho que el duopolio sigue su marcha pese al descontento cada vez mayor de algunos sectores informados que incluso cuestionan la existencia del Senado, el cual, como ya se dijo, no es electo sino designado por el primer ministro y aprobado por el gobernador o gobernadora general en turno.

Ahora bien, no obstante la dificultad que entraña competir en la arena política con los dos partidos hegemónicos canadienses, debe señalarse que las agrupaciones sociales han intentado, la mayoría de las ocasiones sin éxito, contender en elecciones provinciales o federales en contra de las maquinarias liberal o conservadora, sobre todo cuando sectores específicos de la sociedad consideran que sus intereses han dejado de estar representados por la clase política.

Estos esfuerzos han estado presentes en la política de Canadá desde sus inicios, pues como se señaló brevemente con anterioridad, existieron diferentes agrupaciones partidistas provinciales y federales. Quizá el primer grupo antagonista identificado en esa arena política haya sido el de los anti-confederados, quienes cuestionaban el carácter federal asumido por las elites de orígenes británico y francés asentadas principalmente en Ontario y Quebec, y buscaban por ello un aislamiento de la cultura, la religión y los hábitos de los francohablantes de la vida pública canadiense. Es por eso que a este grupo político podría considerársele la expresión reaccionaria más temprana surgida en el país, como un movimiento ultraconservador que por lo mismo encontró poco apoyo y difusión entre los electores de su tiempo. Misma suerte corrió a finales del siglo xix la Asociación Protectora Protestante (APP) (*Protestant Protective Association*), conformada por emigrantes norirlandeses llegados de Estados Unidos y miembros de la *Orange Order*, cuya principal meta era anular los derechos de los francohablantes, alertando al electorado acerca de la amenaza que este grupo católico representaba para los valores protestantes (Watt, 1967: 45-46).

Otro segmento político de relativa importancia a finales del siglo XIX fue el de los Patronos de la Industria (*Patrons of Industry*), quienes fundamentalmente buscaban reivindicar la vida rural y agrícola de aquellos años, en un intento por contener el empuje de los valores industriales urbanos de la época. Si bien gozó de triunfos electorales en algunas circunscripciones, al igual que la APP, sus agremiados terminaron engrosando las filas liberales o conservadoras, según el caso. En realidad el sistema electoral canadiense en que el ganador se lleva todo (FPP) sistemáticamente produce la sobrerrepresentación de los más fuertes y, al mismo tiempo, la subrepresentación de los más débiles (Malcolmson *et al.*, 2016: 185).

Con la llegada del siglo XX, la fortaleza bipartidista del sistema político canadiense se hizo más evidente, pues sólo algunos candidatos independientes en circunscripciones determinadas lograron unos cuantos asientos en la Cámara de los Comunes. Ya para la década de los veinte, el crecimiento económico y la poca variabilidad política entre liberales y conservadores en acciones de gobierno tornó cada vez más complicada la expresión de nuevas formas políticas en el país. Pese a ello, el Partido Progresista de Canadá (*Progressive Party of Canada*) y el Partido Laborista de Canadá, gracias a sus alianzas con partidos políticos provinciales de extracción comunista, lograron obtener decenas de curules en la Cámara baja durante esa década, aunque para los inicios de los años treinta ya era notorio el surgimiento de una nueva agrupación política capaz de aglutinar a las fuerzas provinciales de izquierda en torno a un organismo partidista central.

Este grupo conocido como la Cooperativa Federal Mancomunada (*Co-operative Commonwealth Federation*) (CCF), concentró y elaboró una serie de lineamientos políticos comunes a las formaciones partidistas de izquierda en todo el país a nivel provincial, con la meta de ofrecer una alternativa sólida a los electores descontentos con la crisis de 1929.⁶ De esta forma, para alcanzar cohesión ideológica entre sus agremiados, la CCF convocó a una convención nacional en la provincia de Saskatchewan y ahí dio a conocer una declaratoria a la que tenían que ceñirse todas⁷ y todos sus agremiados en el país y que

⁶ Para mayor información acerca del desarrollo y las estrategias de los partidos de izquierda en Canadá se puede consultar Santín (2017).

⁷ Es importante mencionar que, a diferencia de los liberales y los conservadores, en la fundación de este gremio político las mujeres jugaron un papel muy activo, ya que a través de diversos grupos, como el movimiento de mujeres sufragistas, se integraron plataformas de equidad de género, así como de derecho al voto y a ser votadas. Este movimiento se sumó al de las mujeres trabaja-

fue conocida como el *Manifiesto de Regina*, donde se denunciaron las condiciones en las cuales se encontraba la clase trabajadora canadiense con motivo de la crisis de 1929. También reclamaba por la desigual distribución de la riqueza y responsabilizaba del estado de las cosas a los gobiernos liberales y conservadores por considerarlos meros instrumentos del capitalismo. Proponeía terminar con el caos capitalista a través de una economía planificada, socializada y responsable en materia de explotación de los recursos naturales, que antepondría siempre los intereses de la gente a los de la minoría financiera y propietaria de los medios de producción (Whitehorn, 1992: 39).

La respuesta organizada desde los más altos círculos de poder, con el fin de contrarrestar esta propaganda que cuestionaba el papel de las elites en el país, fue involucrar y comparar al socialismo canadiense con el nacional-socialismo alemán y el socialismo soviético, mediante una estrategia bien pensada para generar miedo en los electores, pues el impacto de dichos movimientos europeos comenzaba a generar inquietud en las sociedades y en las democracias occidentales ya para mediados de los años treinta. Aunado a lo anterior, la gestión de gobierno del liberal William Lyon Mackenzie King, quien se mantuviera en el cargo de manera ininterrumpida de 1935 a 1948, dirigió buena parte de su atención a paliar las tensiones sociales surgidas durante los años de la crisis mediante un programa que brindaba mayor atención médica, educativa y de vivienda. De esta forma, Mackenzie King le fue disputando muchos postulados a la izquierda canadiense y en su lugar puso el sello liberal a los programas de mayor alcance social.

Esta hábil acción política del gobierno liberal consistió en adoptar varias viejas propuestas de la izquierda de su país, entre ellas las de impulsar la producción agrícola, reducir los impuestos, redireccionar el gasto público, impulsar diferentes programas de apoyo social a los más necesitados, como los de seguro de desempleo y apoyo a la niñez, entre otras medidas, todas las cuales formaron parte de un ambicioso proyecto enmarcado en los programas de la posguerra alrededor del modelo keynesiano. Todo lo anterior desarticuló los esfuerzos de los partidos provinciales de derecha que impulsaban una agenda ultraconservadora de mayor libertad económica y subsidios al capital privado. Cabe agregar que tales organizaciones de extrema derecha se asentaron principalmente en las provincias con mayores recursos energéticos, sobresaliendo sin duda Alberta.

doras, que desde principios de la segunda década del siglo xx formó parte activa de las organizaciones obreras canadienses.

De esta forma, tanto los movimientos organizados de la extrema derecha, como las acciones de gobierno de las administraciones liberales y conservadoras en los años cuarenta y cincuenta, obligaron a la izquierda a una nueva redefinición ideológica, ya que ciertamente muchas de sus banderas habían sido adoptadas por el modelo keynesiano de la posguerra, sin importar que fueran gobiernos liberales o conservadores. Por ello, en un intento por modernizarse, la CCF hizo a un lado la retórica de arrebatar los medios de producción a la burguesía canadiense, y en su lugar postuló un programa de mejoras sociales progresivas y democráticas en donde obreros y trabajadores alcanzarían el bienestar dentro de los marcos constitucionales.

Al documento en donde planteaba tal viraje y moderación ideológica se lo conoce como la *Declaración de Winnipeg de 1956*; en ella, si bien se reiteraba la propuesta socialista para Canadá, se rechazaban al mismo tiempo los totalitarismos en Europa del Este, en clara referencia al modelo socialista soviético. Si bien esta arenga de la izquierda canadiense reconocía avances en materia social en los años previos, también subrayaba que la mayor atención social puesta en marcha por los gobiernos liberales y conservadores obedecía sobre todo a la presión de las organizaciones sociales afiliadas a la CCF.

Sin embargo, a pesar de esta moderación en sus estatutos, el laborismo canadiense se sumó a las campañas de desprestigio que se instrumentaban desde el poder en contra de la CCF, pues regularmente afirmaba, a través de sus diarios y panfletos provinciales, que dicha agrupación estaba integrada por fanáticos que exponían a Canadá a caer dentro del modelo “comunista ruso”. Esta retórica y propaganda conocidas erróneamente como anticomunista por aquellos años se sumaban a la opinión de reconocidas figuras liberales y conservadoras en el Parlamento canadiense, que en cada oportunidad afirmaban que la CCF no era más que una banda de incendiarios y provocadores revoltosos controlados desde Moscú (Gidluck, 2012: 117).

De este modo, pese a tener en su contra toda esta urdimbre política, mediática y de gobierno, la izquierda partidista en Canadá logró ocupar asientos parlamentarios de forma regular desde los años treinta, haciendo evidente que, no obstante haber nacido en un modelo que privilegia el bipartidismo de manera sistémica, había encontrado los medios para enfrentar en la arena electoral a las poderosas maquinarias liberal y conservadora. Ahora bien, debe señalarse que su supervivencia en la nación del Norte ha sido posible gracias a sus reafirmaciones ideológicas de carácter más moderado, mismas

que hicieron necesario el nacimiento de un nuevo organismo en 1962, este sí de carácter nacional, conocido como Partido Neodemócrata (*New Democratic Party*), cuyas siglas en inglés son NDP. Esta agrupación requirió, a su vez, de un nuevo documento normativo con estrategias que se ajustaran al mundo de la guerra fría, pero que al mismo tiempo marcaran una diferencia respecto de los dos partidos dominantes. Tal documento fue conocido como *Declaratoria del nuevo partido*.⁸

De este modo, a partir de los años sesenta y hasta las primeras décadas del siglo XXI, el NDP ha ido consolidando su posición como la tercera fuerza política en la Cámara de los Comunes, con algunos momentos de crisis como en los noventa, pero también con conquistas sobresalientes, como ser la primera minoría parlamentaria en el periodo 2011-2015. Así, han debido pasar más de ocho décadas para que un tercer partido se instalara de manera definitiva en el escenario, y de esta manera convertirse en un contendiente real en todas las provincias y territorios del país, algo que, como se ha visto, es particularmente difícil en el modelo Westminster, y que en Canadá es bastante más complicado porque ahí los liderazgos liberales y conservadores nunca han mostrado disposición para cogobernar con esa fracción política, sobre todo para no verse obligados a incorporar una agenda más progresista.

Por ello es evidente que si un partido diferente de los tradicionales Liberal y Conservador quiere ser gobierno en Canadá, deberá de manera forzosa ganar las elecciones en un sistema más bien cerrado como lo es el *first past the post* que, como se ha reiterado, estuvo diseñado desde sus añejos orígenes ingleses para que los partidos grandes lo sigan siendo y conserven sus mayorías en amplias regiones, mientras que los pequeños deben luchar para sobrevivir localmente al paso de los años.

Es precisamente por eso que los gobiernos de coalición han sido un recurso para mantener la gobernabilidad en Gran Bretaña y en el resto del mundo Westminster, pues se recurre a los partidos pequeños para alinearlos alrededor de alguno grande por periodos específicos hasta las nuevas elecciones. Lo anterior hace posible sacar adelante la acción de gobierno mediante el consenso parlamentario; sin embargo, esto no pasa en Canadá y ahí es en donde justamente persiste la dificultad para que nuevos partidos políticos

⁸ Para una revisión y comparación completa de conceptos en las diferentes declaraciones y estatutos erigidos como los documentos normativos de la izquierda canadiense puede consultarse el capítulo "Party Blueprints" en Whitehorn (1992: 34-70).

encuentren protagonismo a nivel nacional y cauces de negociación con el duopolio liberal-conservador.

El caso del NDP sin duda es el más idóneo para estudiar los movimientos sociales y partidistas en Canadá, ya que no sólo logró sobrevivir, sino que también alcanzó la siguiente fase —lo que no ha conseguido ningún otro— es decir, expandirse a todas las provincias. Así, gracias a la organización de sus bases a lo largo de todo el territorio, el movimiento de la izquierda partidista canadiense ha ido ganando mayores espacios y asientos parlamentarios en distintas circunscripciones, derrotando sobre todo a sus contrincantes del Partido Liberal, con quienes comparte agendas en materia social. Así, el votante de clase trabajadora urbana y los pequeños agricultores han encontrado otra opción a la planteada por los liberales para responder a sus necesidades y demandas.

Ahora bien, más allá del NDP es preciso informar que ha habido otros movimientos y organizaciones partidistas sobresalientes, pero por su carácter local o provincial no han logrado desplegar sus bases hacia otros puntos, limitando con ello su presencia, pues recordemos que el sistema *first past the post* elimina todos los sufragios de los aspirantes derrotados. Lo anterior provoca que los candidatos liberales y conservadores, por ser los únicos que generalmente tienen presencia en todas las circunscripciones electorales canadienses, se presenten uno frente al otro como las únicas dos opciones con posibilidades reales de ganar, lo que generalmente obliga al elector a ejercer el voto útil, y no sufragar por su opción preferida.

Esta situación en la que se coloca al electorado canadiense se ha logrado evitar en otros países del sistema Westminster con la instauración de la modalidad mixta, en la cual, si bien prevalece el FPP para un porcentaje considerable de los asientos en el Parlamento, también se brinda la oportunidad de que los votos de los candidatos perdedores sean agregados a las listas de plurinominales presentadas por los diferentes partidos políticos, otorgándole a éstos el derecho a ocupar escaños tras haber conseguido porcentajes generosos de votación en todo el país, aunque no hubiesen ganado circunscripción electoral alguna. Insistimos, en Canadá los electores no tienen esta opción.

Una muestra de esta paradoja democrática canadiense es la creación, el crecimiento y la desaparición de diversos partidos políticos locales o provinciales, pues al final de cuentas no logran alcanzar presencia en otras regiones. Quizá los casos del Partido Reformista, surgido en Alberta y con cierta presencia en Manitoba y Saskatchewan, en los años noventa, y del Partido del Bloque

Quebequense en Quebec en los mismos años, sean el mejor ejemplo de cómo opera la maquinaria político-electoral canadiense, ya que si bien el sistema electoral *first past the post* consolidó la presencia de ambos partidos en sus provincias de nacimiento al contar en ellas con sus principales bases, al mismo tiempo imposibilitó su crecimiento en otros lugares del país, ya que era imposible que ganaran circunscripciones electorales en otras provincias diferentes de las suyas. De este modo, el FPP sirvió de contención para que ideologías de ultraderecha, como la del Partido Reformista, o separatistas, como la del Bloque Quebequense, pudieran extenderse hacia otras regiones de Canadá en el siglo XXI.

Al final, el Partido Reformista, con presencia en el oeste, tuvo que ceder principios ideológicos y moderar su discurso para poder ser incluido en las nuevas agrupaciones conservadoras, éstas sí de carácter nacional, a finales del siglo XX y principios del XXI, como el actual Partido Conservador, que logró aglutinar a los conservadores moderados y cosmopolitas de Ontario y el Atlántico, con los conservadores populistas de las praderas y el Oeste, al lado de los quebequenses no separatistas (Flanagan, 2009a: 202). Por su parte, el nacionalista Bloque Quebequense ha terminado sucumbiendo ante el avance de la socialdemocracia, representada por el NDP, pues en dicha provincia se han asentado bases considerables de la izquierda más contestataria y progresista. Sin duda, los casos del Partido Reformista en el Oeste y del Bloque Quebequense en el Este son los ejemplos más recientes de cómo el nativismo y el nacionalismo canadienses han ido encontrando vías para fluir y enfrentar a los dos partidos dominantes, mismos que han terminado por ejecutar estrategias con carácter de unificación nacional (Chhiber y Kollman, 2004: 57) para contrarrestar estas reacciones, paradójicamente democráticas.

Por otra parte, en lo que compete a los organismos políticos fundadores del sistema canadiense (Partido Conservador y Partido Liberal), debe agregarse que con el paso de los años la fracción conservadora ha logrado superar sus diferencias, ya que después de distintas escisiones y refundaciones, el espíritu conservador sigue vigente y domina buena parte del imaginario colectivo de aquel país. Una muestra de ello es su tendencia a mantener los valores tradicionales anglosajones, y en menor medida franceses, para propagarlos, masificándolos con relativo éxito en un país multicultural.

Precisamente esta multiculturalidad y diversidad canadienses han sido el factor de división entre los sectores más conservadores, ya que el conser-

vadurismo de las provincias centrales (Ontario y Quebec), junto con el de las provincias del Atlántico, más cercanas a las corrientes políticas y culturales europeas, son susceptibles de manifestar mayor tolerancia. Por el contrario, las provincias de las planicies (Manitoba y Saskatchewan) y las del Oeste (Alberta y en mucho menor medida la Columbia Británica) suelen presentar propuestas conservadoras más excluyentes y menos cosmopolitas, tal vez por las características geográficas más aisladas y distantes con el resto del país. De hecho, este nativismo se expresó abiertamente en el Partido Reformista cuando en los años ochenta y noventa rechazaba el uso del idioma francés como estrategia para expandir su mensaje hacia otras regiones de Canadá.

Ese tipo de diferencias en el nicho conservador canadiense regularmente provocaba mayores coincidencias ideológicas entre los conservadores *tories* de las provincias centrales y del Atlántico y los liberales, que con los conservadores de las praderas y el Oeste, pues estos últimos, por su carácter aislado, solían mantener posiciones más reservadas hacia las propuestas y posturas políticas de sus contrapartes conservadoras de otras regiones. Lo anterior tiene sus orígenes en la propia conformación de Canadá como entidad política autónoma en el siglo XIX, ya que los padres fundadores eran en su gran mayoría hombres socialmente bien posicionados del alto y el bajo Canadá, así como de Nueva Brunswick y Nueva Escocia, quienes encontraron en la suma de voluntades de las elites anglosajonas y francófonas la vía para continuar con sus privilegios y darle rumbo político al nuevo país, sin desprenderse del todo de la tutela y la protección británicas.

En este punto resulta necesario mencionar que el papel de las elites y su manejo de las instituciones y de las mayorías ha sido abordado por diferentes autores, como Giovanni Sartori, quien las ubica como organizadoras de partidos políticos integrados por notables, que sin grandes diferencias ideológicas entre sí suelen contender en la arena política, evitando con ello generar polarizaciones sociales, lo que sin duda coadyuva al mantenimiento del *statu quo*. En tal sentido, el propio Sartori afirma que el sistema británico favorece el bipartidismo, en perjuicio del elector, que ve sacrificada su representación en el Parlamento para favorecer la gobernabilidad (Sartori, 2002: 269). Ello crea condiciones para la conformación de proyectos políticos poco divergentes entre sí por parte de aquellos que comparten el poder.

En el caso canadiense, sus dos principales agrupaciones políticas (liberales y conservadores) han construido, con el paso de más de siglo y medio de

existencia, una serie de coincidencias ideológicas que les ha permitido compartir un sólido bipartidismo oligárquico.

Este arreglo político de notables opera en Canadá con estructuras institucionales arropadas en un sistema electoral excluyente, como el tradicional *first past the post* (o uninominal) que, como ya se ha visto, convierte los votos de circunscripciones individuales en asientos parlamentarios. Este ejercicio elimina por sistema a los partidos pequeños, que encuentran pocos alicientes para mantenerse en la disputa política frente a los dos grandes del *establishment*. Debe subrayarse que, ciertamente, la izquierda organizada ha encontrado, después de muchos esfuerzos, los medios no sólo para sobrevivir, sino también para competir a nivel federal en todas las provincias y territorios.

Es por ello que aquí se afirma que la política canadiense parecería obedecer al carácter conservador y tradicionalista de sus elites, las cuales identifican pocas amenazas entre sus pares toda vez que sus antagonistas de la otra gran agrupación no suelen poner en riesgo los valores construidos por ambos desde hace décadas. Todo eso ha encontrado cobijo en una sociedad que, en su gran mayoría, ha terminado adoptando como propios los valores de dichas elites, mostrando además una fuerte tendencia a apegarse a los lineamientos dictados desde el poder, dentro de los cuales la unidad territorial, la tolerancia y la promoción del multiculturalismo han permeado como directrices nacionales.

Debe señalarse que en Italia diversos autores han trabajado las estrategias que las clases dominantes utilizan para llegar y mantenerse en el poder. Entre ellos sobresalen Vilfredo Pareto (1987), Gaetano Mosca (2011) y Robert Michels (2001), quienes en sus trabajos señalan y describen las maniobras que aquéllas llevan a cabo para autolegitimarse a costa de la sociedad que pretenden representar. Lo anterior, efectivamente se logra a través de un esquema en donde los sistemas políticos y electorales hacen posible la existencia y dominio de tales sectores. En este sentido, Pareto afirma que las elites se conforman de un número limitado de individuos que buscan mantener el equilibrio en el país para alcanzar la aprobación de sus gobernados. Deben ser lo suficientemente intuitivas e innovadoras, de modo que a través de ejercicios electorales rutinarios consultan la opinión del pueblo respecto de sus gestiones y decisiones de gobierno, buscando evitar de ese modo exabruptos sociales que pongan en riesgo la estabilidad que han logrado (Pareto, 1980).

Por otra parte, para Gaetano Mosca las clases empoderadas se encuentran formadas por grupos compactos muy bien organizados y conocidos como

la clase política, con capacidad suficiente para tomar grandes decisiones de interés público, procurando para sí mismos privilegios materiales que les dan la oportunidad de construir valores intelectuales y morales extensivos al resto de la sociedad, la que, por cierto, cuenta con limitadas alternativas y regularmente termina adoptando dichos valores para sí misma. Estos sectores privilegiados requieren de marcos democráticos que sustenten su existencia y predominio político, económico, social y cultural, y lo hacen a través de ejercicios electorales representativos indirectos.⁹

En este mismo sentido, Robert Michels afirma que las elites poseen fuertes y marcadas tendencias oligárquicas y burocráticas, por lo que los partidos políticos se convierten en mecanismos necesarios para mantenerse en el poder, ya que se transforman en los medios legítimos de dominio a través de ejercicios electorales democráticos. También Michels confirma que la “supuesta” renovación de las reglas de gobierno es una pura formalidad, ya que la comisión temporal de un encargo de poder llega a ser permanente, con lo que la conservación del cargo se transforma en un derecho establecido. En otras palabras, las autoridades democráticamente electas en este tipo de sistemas, tal y como sucede en Canadá, se encuentran más firmes en el poder que los funcionarios de los organismos aristocráticos. Lo anterior se sustenta en que las elites, en este esquema democrático-electoral, pueden permanecer mucho más tiempo en el cargo que la duración media en un Estado monárquico o no democrático (Michels, 2001: 137).

Lo anterior también lo abordó quien ha sido considerado como uno de los teóricos de la ciencia política más sobresalientes acerca del papel de los partidos políticos. Nos referimos a Maurice Duverger, quien en diversos pasajes describe la realidad del sistema Westminster y sus características particulares en Canadá, con la ventaja de que su análisis ahonda en el bipartidismo que lo define. En este sentido, sostiene que éste es un fenómeno específicamente anglosajón, aunque existen países con sistema Westminster en donde predomina un tripartidismo en el que los tres protagonistas tienen opciones reales de acceder al poder, ya sea por mayoría o por coaliciones, caso este último al que no pertenece Canadá.

⁹ Puede profundizarse en Gaetano Mosca (2011). Asimismo, la reproducción del ensayo original, *Elementi di Scienza Politica*, escrito en 1896, en donde Mosca habla del papel de las elites como entes de dominio cultural, puede verse en <<http://americo.usal.es/iberoame/sites/default/files/laclasepolitica.pdf>> [consultada en febrero de 2018].

Sin embargo, a su juicio el común denominador de los partidos políticos de los países anglosajones es su estructura de toma de decisiones centralizada, en la cual el control de las finanzas del propio partido, así como la designación de candidaturas, dependen del poder central y no tanto de las legislaturas locales (Duverger, 2014: 237-238). Lo anterior ha sucedido en Gran Bretaña durante siglos, así como en sus antiguos dominios, como Canadá.

Ahora bien, para que dichas estructuras duopólicas hayan logrado mantener el control político durante más de siglo y medio en territorio canadiense, han tenido que desarrollar plataformas atractivas que consiguen que sus pilares ideológicos permeen en amplios sectores de la sociedad que, pasiva, abraza tales principios como propios en un ejercicio de enajenación colectiva.

En este sentido, debido a las limitadas diferencias en las acciones de gobierno, ha sido necesario que liberales y conservadores logren emitir un mensaje ideológico claro que los distinga a cada uno del otro partido dominante, para desde ahí cimentar plataformas de gobierno y planes de acción que se instalen en el imaginario colectivo de las mayorías, entendiendo como tales a ese amplio sector que vota liberal o conservador, el cual ha logrado alcanzar en las elecciones federales del siglo XXI entre el 65 y 70 por ciento del voto popular en Canadá. Lo anterior sucede al mismo tiempo que el Partido Neodemócrata, el Partido Verde y el Bloque Quebequense, que son los otros tres con presencia parlamentaria, han conseguido obtener índices de votación de alrededor del 35 por ciento (Elections Canada, 2018).

Por lo anterior se hace necesario conocer las generalidades de las plataformas electorales de los liberales y de los conservadores canadienses, según sus propios documentos normativos. Por ejemplo, los liberales se asumen como la opción más progresista y promotora de los derechos humanos, como los impulsores del sistema de salud pública *Medicare*, no obstante que este último haya sido enarbolado por la izquierda cuando Thommy Douglas era el premier de Saskatchewan.¹⁰ Es importante agregar que en su momento fue señalado como parte de un sistema comunista y maléfico que impulsaría el aborto y atraería hacia Canadá a doctores poco calificados procedentes de otros países (Brown y Taylor, 2012: 5); no obstante, como ya se comentó, los liberales adoptaron desde el gobierno federal dicho programa de salud médica universal y le pusieron su sello.

¹⁰ Para una revisión completa del proceso de instauración del *Medicare* en Canadá puede verse Brown y Taylor (2012).

Asimismo, los liberales se autoproclaman como quienes han logrado mayores compromisos internacionales dentro de marcos multilaterales, ya que durante la administración del primer ministro Lester B. Pearson, en los años sesenta, el país propuso con éxito ante la comunidad internacional la conformación de los cuerpos de mantenimiento de la paz, conocidos como *Peacekeeping Operations* o Cascos Azules. Asimismo, gracias al primer ministro también liberal, Pierre Elliot Trudeau, en los años sesenta, setenta y parte de los ochenta, el Partido Liberal se considera a sí mismo el promotor del bilingüismo, ya que en su periodo se determinó reconocer a la lengua francesa como idioma oficial en los actos públicos. Además, el multiculturalismo y su política de recepción de migrantes y refugiados se ha convertido en otro estandarte político para atraer votantes. De igual modo, los liberales se asumen políticamente como los defensores de los símbolos patrios, ya que también en los años sesenta, durante el gobierno de Pearson, hicieron a un lado la bandera con motivos británicos y adoptaron la actual, con la hoja de arce.

De igual manera, la separación política del Parlamento canadiense respecto del británico, acaecida en los años ochenta durante el gobierno de Pierre Elliot Trudeau, y oficializada con la proclamación de la *Constitutional Act* de 1982, impulsa a los liberales a distinguirse de sus oponentes políticos como el partido que defiende y promueve la autonomía, pues a partir de los años ochenta del siglo xx Canadá tiene autonomía plena para enmendar su Constitución y promulgar leyes sin la intervención o la venia de la Gran Bretaña. Algo similar ocurre con la explotación responsable de los recursos naturales, ámbito en donde los liberales procuran ofrecer una imagen de desarrollo sustentable en equilibrio.¹¹

En lo que corresponde al Partido Conservador, si bien éste ha tenido, como ya se señaló, múltiples agrupaciones a lo largo de su historia, el espíritu conservador ha seguido vigente en todo el país, manteniendo por región ciertas características que los diferencian. Así, al igual que entre sus competidores, los valores conservadores más promovidos son aquellos puestos en marcha durante las administraciones conservadoras. De esta forma, la conformación y unidad del país, promovida con éxito a lo largo de las primeras décadas de gobiernos conservadores; el derecho al voto de la mujer, puesto

¹¹ Sobre estos y otros valores liberales puede consultarse información en la página oficial del Partido Liberal (Liberal Party of Canada, 2018).

en marcha durante la gestión conservadora de Sir Robert Borden a partir de la segunda década del siglo xx; la promoción del libre comercio, instrumentada con fuerza por el gobierno de Brian Mulroney en los ochenta y noventa, apoyándose en sus contrapartes en Estados Unidos, Ronald Reagan, y Gran Bretaña, Margaret Thatcher, y el impulso a la libertad individual como eje rector del neoliberalismo de finales del siglo pasado, fueron elementos que terminaron incrustándose en la mentalidad conservadora canadiense contemporánea.

De la misma manera, el derecho a disfrutar los resultados del trabajo duro, la disciplina y la responsabilidad fiscales, así como la necesidad de fortalecer la posición militar canadiense en el mundo, fueron elementos muy socorridos durante la gestión de Stephen Harper en las dos primeras décadas del siglo xxi.¹² Y es que precisamente logró consolidar, una revolución conservadora que reformuló ideológicamente al propio conservadurismo canadiense, justo en momentos en que el nativismo y los nacionalismos vuelven a tomar bríos en Occidente con manifestaciones claras en Europa, de manera particular en Gran Bretaña con el triunfo del Brexit, y en Estados Unidos con la llegada de Donald Trump a la Presidencia.

Así, la creación de rasgos distintivos en los que se empeñan liberales y conservadores para diferenciarse del “otro” se circunscribe a acciones de gobierno muy similares en realidad, cuyos matices son los elementos a los que acude con regularidad el partido que se encuentre en el extremo opositor, pues así va sentando las bases y preparando el discurso para las siguientes elecciones. Por lo tanto, el ejercicio democrático electoral se encuentra sujeto a dos partidos hegemones que difieren en algunos puntos en sus plataformas electorales, pero que comparten acciones y preocupaciones de gobierno. Así ha sido durante siglo y medio, y al parecer así será hasta que una tercera o cuarta fuerza logre ejercer presión mediante gobiernos de coalición.

En este sentido, debe llamar mucho la atención que en las campañas electorales federales de 2015 el líder del Partido Liberal, Justin Trudeau, prometió que de ganarlos esos serían los últimos comicios regidos por el sistema *first past the post*, pues afirmaba que Canadá necesitaba de una reingeniería político-electoral que hiciera más justo e incluyente su sistema político. Lo anterior sin duda beneficiaba a los otros organismos políticos con presencia nacional, es decir, el Partido Neodemócrata, el Partido Verde y,

¹² Sobre estos y otros valores de las corrientes conservadoras contemporáneas puede consultarse información en la página oficial de Partido Conservador (Conservative Party, 2018).

en menor medida, al Bloque Quebequense, incluso también a otros pequeños partidos políticos locales.

Sin embargo, una vez en el poder, el gobierno de Justin Trudeau afirmó que no existía consenso a nivel nacional para lanzar esas reformas electorales y, por ende, se mantuvo el viejo esquema FPP, que por cierto fue el que le permitió a Justin Trudeau obtener una mayoría de cerca del 55 por ciento de los asientos en el Parlamento (184 de 338), con sólo el 39.5 por ciento de los votos (*The Guardian*, 2017).

Al final de cuentas, como ha podido observarse, en Canadá no ha existido una evolución socialdemócrata dentro del seno liberal, tal y como sí sucedió en su oportunidad en Gran Bretaña, cuando los laboristas —sobre todo a partir de la segunda década del siglo xx— desplazaron y ocuparon los espacios electorales que tradicionalmente monopolizaban los liberales, ya que estos últimos dejaron de representar los intereses de la clase trabajadora británica que, consciente de su existencia; exigió mayor representatividad al interior de la Cámara de los Comunes. Lo anterior se alcanzó con éxito y regularidad a partir de los treinta; no obstante, queda claro que tal conciencia de clase no ha tenido la misma penetración en Canadá, en donde la clase trabajadora urbana más bien disfrutó tradicionalmente de los beneficios de una economía en crecimiento, sobre todo durante la segunda mitad del siglo xx.

Sin embargo, la presión proveniente de los sectores sociales más activos ha puesto en evidencia la paradoja democrática canadiense, que con sus elites ha mantenido en la exclusión a otras expresiones partidistas organizadas en un intento por seguir monopolizando el poder y la toma de decisiones en torno a un compacto grupo político que lidera las cúpulas de liberales y conservadores, los cuales suelen encontrar salida a sus diferendos al interior del Parlamento, en su Cámara baja.

Funcionamiento del sistema bicameral: el Senado y la Cámara de los Comunes

EL SENADO

El sistema parlamentario canadiense trabaja a imagen y semejanza del británico. Es uno de los diseños más tradicionalistas del modelo Westminster,

sobre todo por las características que ha venido adoptando su Cámara alta o Senado, cuyos integrantes, tal y como sus contrapartes en el Palacio de Westminster, no son electos sino designados por sus méritos. En Canadá, a los senadores los nombra el gobernador general —como representante de la Corona británica—, quien a su vez recibe recomendaciones del primer ministro en turno para ocupar los asientos vacantes.

En la actualidad son 105 los senadores que integran la Cámara alta canadiense, mientras que sus símiles en la Cámara de los Lores británica son 793 (hasta febrero de 2018), con la salvedad de que ahí prevalecen los lores espirituales (obispos anglicanos) y los temporales, que en su gran mayoría son hombres y mujeres destacados en diversas áreas de interés público.¹³ Su encomienda en la Casa de los Lores no tiene una duración estricta, aunque suelen retirarse al cumplir los ochenta años, ello según la reforma instrumentada en Gran Bretaña en 2014, a partir de la cual el retiro es voluntario (Taylor, 2015: 1-2). En contraparte, los senadores canadienses ocupan su cargo hasta cumplir los setenta y cinco años, aunque el primer ministro posee facultades suficientes para cesarlos si así lo considera necesario y para nombrar nuevos representantes adeptos a su agrupación partidista. Esta práctica ha sido bastante común en las recientes décadas.

El Senado canadiense comenzó sus operaciones al mismo tiempo que la Cámara de los Comunes, es decir, en 1867. Su principal tarea, como bien lo aclaró en su momento el primer ministro inicial, Sir John Alexander Macdonald, consistiría en ofrecer una reflexión sobria capaz de detener los desenfrenos de la democracia emanados en la Cámara de los Comunes. Con el paso de los años este organismo parlamentario ha ajustado sus acciones a mantener un número limitado de atribuciones, con el fin de no entorpecer las actividades de la Cámara baja. Entre las responsabilidades que han permanecido a lo largo de poco más de siglo y medio de existencia es importante considerar a los comités especiales.

Éstos han sido los responsables, desde su creación en 1867, de realizar un seguimiento permanente de los asuntos de mayor relevancia nacional. Se trata de organismos que sólo pueden ser suspendidos cuando la Cámara de los Comunes cierra labores legislativas debido a una prórroga, o cuando ocurre

¹³ Debe aclararse que pese a que aún existen lores de carácter hereditario en la Cámara de los Lores británica (menos de cien en la actualidad), éstos han venido disminuyendo su importancia para dar paso a la mayor visibilidad y protagonismo de los temporales (UK Parliament, 2018b).

una disolución del Parlamento con vistas a un proceso electoral federal cercano. En ellos se integran senadores de diversa filiación política y se dividen en dieciséis comisiones, entre las que destacan: Pueblos Originarios o Primeras Naciones, Agricultura, Pesca, Comercio, Ética y Conflictos de Interés del Senado, Recursos Naturales, Derechos Humanos, Lenguas Oficiales, y Reglas y Procedimientos Parlamentarios (Senate Procedure in Practice, 2015: 175-180). De todas, esta última es la encargada de vigilar la operación del Parlamento en ambas cámaras, buscando salvaguardar de forma estricta los usos y costumbres heredados del Parlamento británico que, por cierto, desde el siglo xv ha venido operando en forma de comités en la Cámara de los Comunes en Westminster.

Un personaje central en la operatividad del Senado canadiense es su *speaker*, el cual, a diferencia de en Gran Bretaña, no está sometido a la figura del monarca de manera directa, pero sí de modo muy tenue al gobernador o gobernadora general en turno, no así al primer ministro en funciones, el cual suele marcar la dirección del Senado en todas sus formas, sobre todo para evitar que éste se manifieste como un obstáculo del gobierno. A diferencia del Reino Unido, al *speaker* no lo nombra el monarca sino su representante, el gobernador general, quien es “propuesto” a su vez por el primer ministro. Desde el principio el *speaker* se identifica como tal ante sus colegas en la Cámara alta y se sienta en la cabecera del Senado mirando desde su lado derecho a la fracción parlamentaria afín al partido gobernante, y del lado izquierdo a la oposición. Su secretario se ubica también en la cabecera de la Cámara, entre las dos bancadas, de frente. El *speaker* es, en términos generales, el presidente del Senado, es decir, supervisa los debates, realiza el conteo de votos y representa a la Cámara alta en diversas ceremonias protocolarias. También es el enlace oficial directo entre el Senado y la Cámara de los Comunes.

Debajo de él se encuentra el secretario del Senado, quien se coloca ante una mesa cuadrada a pocos metros del *speaker*. Este funcionario es en realidad el experto en los procedimientos parlamentarios, así como el administrador oficial de los asuntos de la Cámara. Asimismo, es el responsable de preservar los registros del Parlamento para entregarlos actualizados al *speaker* cuando éste los requiera en sus negociaciones con los comunes o con el primer ministro. El secretario se hace acompañar por los ayudantes del *speaker*, quienes suelen ser dos senadores que comparten la misma mesa; uno de ellos es el *speaker pro tempore*, cuya principal tarea consiste en apoyar y asesorar al *speaker* o en

suplirlo cuando se ausente para atender asuntos de protocolo o responsabilidades de gobierno. Por otra parte, el “ujier del bastón negro” (*usher of the black rod*) es un alto funcionario del Senado que suele permanecer de pie a la izquierda del *speaker*, y su labor se centra en mantener y recordar los deberes ceremoniales de los senadores durante las sesiones.¹⁴

En lo que corresponde al “discurso del trono”, al igual que en su paradigma británico, el Senado es la sede de la inauguración de cada ejercicio parlamentario, ya sea por elecciones y llegada de un nuevo Parlamento, o por inicio de sesiones parlamentarias después de un receso. En esta ceremonia, que reafirma sus vínculos políticos con la Corona británica, el gobernador o gobernadora general brinda un discurso que abre las sesiones legislativas y reconoce el ejercicio presupuestario por desarrollar durante el año en cuestión. Al igual que en Gran Bretaña, los miembros de la Cámara alta y los representantes de la Corona, en este caso el gobernador general, no deben ingresar a la Cámara de los Comunes, por lo que el ujier del bastón negro se dirige desde la sala roja del Senado hacia la sala verde de los Comunes para anunciarles con tres golpes en el portón que el representante de la Corona ha llegado al recinto. Desde ahí guía lentamente a todos los comunes hacia la sala del Senado para ser testigos de la lectura del documento inaugural. Como se recordará, este procedimiento protocolario es el mismo que se realiza en Gran Bretaña, con la salvedad de que quien lee tal discurso suele ser el o la monarca en turno.

Ahora bien, más allá de los protocolos es evidente que el peso del Senado en Canadá es relativo, ya que carece de grandes discursos y evita las polémicas de carácter político que puedan confrontarlo con la sociedad. En este sentido, debe señalarse que diversos sectores progresistas de todo el país cuestionan de forma cada vez más severa la existencia de este nivel de gobierno, que en realidad tiene limitadísimas atribuciones. Así, regularmente el ejercicio del Senado reafirma el carácter tradicionalista del sistema político canadiense. Tomando en cuenta lo anterior debe recordarse lo antidemocrático de esta Cámara, que en realidad no ayuda mucho para disminuir las observaciones de sus críticos. Es por eso que muchos de ellos afirman que el Senado canadiense es un residuo del viejo Imperio británico o, en el mejor de los casos, una institución redundante (Smith, 2017: 178).

¹⁴ Para mayor información acerca de las funciones administrativas y protocolarias de los distintos funcionarios del Senado canadiense puede verse Parliament of Canada (2018a).

En la actualidad, los 105 senadores canadienses se dividen entre las diez provincias y los tres territorios de la siguiente manera: Ontario y Quebec cuentan con veinticuatro asientos cada una; tanto Nueva Brunswick como Nueva Escocia tienen diez; Columbia Británica, Alberta, Saskatchewan, Manitoba y Terranova-Labrador disponen de seis por provincia; la Isla del Príncipe Eduardo posee cuatro escaños, mientras que los tres territorios (Yukón, Nunavut y del Noroeste) conservan para sí un asiento por circunscripción. Otro dato curioso del Senado canadiense es que si bien Ontario y Quebec concentran poco más del 45 por ciento de la población, y por ello suman cuarenta y ocho de las ciento cinco curules, Nueva Brunswick y Nueva Escocia, pese a no alcanzar en conjunto siquiera el 5 por ciento de los habitantes mantienen veinte senadores entre las dos, ello en un acto que reafirma y respeta su jerarquía y tradición como provincias fundadoras. Por su parte, el resto de las demarcaciones, con excepción de la Isla del Príncipe Eduardo, cuentan cada una con poco más del 5 por ciento de los pobladores y tienen acceso a sólo seis lugares.

Esta serie de contradicciones sistémicas del Senado se ha ido alimentando con la retórica de su limitado funcionamiento y elevada polémica, sobre todo después de que en 2013 se ventilaron una serie de escándalos de corrupción entre algunos de sus miembros durante la gestión del primer ministro Stephen Harper, lo que obligó a su suspensión del cargo y expulsión pública después de que se descubrieran ciertos actos de deshonestidad y malversación de recursos por parte de varios senadores conservadores, entre ellos, Mike Duffy (Isla del Príncipe Eduardo), Pamela Wallin (Saskatchewan) y Patrick Brazeau (Quebec), todos nominados por Harper.

Las acusaciones se originaron después de que la auditoría general señalara que varios integrantes de la Cámara alta habían recibido miles de dólares en fondos y recursos públicos por concepto de viáticos y pagos de renta para casas ubicadas en las provincias que representaban, cuando en realidad habían optado por residir en Ottawa, sede del Senado, y además nunca justificaron dicha permanencia en la capital, ni mucho menos aclararon el destino de los recursos. Esta situación llegó a tal grado de conflicto, que el Senado decidió a finales de año, por votación mayoritaria, suspender a los tres senadores, congelándose su salario y negándoles todo derecho político como miembros del Parlamento mientras se llevaban a cabo las investigaciones.

Sin duda, el caso más grave fue el de Mike Duffy, no sólo por ser un reconocido periodista a nivel nacional y un personaje carismático ante los me-

dios, sino porque el mismo jefe de gabinete de Harper; Nigel Wright, se vio obligado a renunciar después de que se comprobara que le había entregado un cheque por noventa mil dólares a Duffy, para hacer pagadera la cantidad que la auditoria general lo acusaba de malversar por concepto de viáticos y rentas falsas. De hecho, fue Duffy quien afirmó que había recibido tal cheque de manos del propio jefe del gabinete conservador, en un intento por silenciar el escándalo mediático al pagarse la deuda; pero incluso fue más allá, al señalar que él había discutido el tema con el primer ministro, y que además éste se encontraba enterado de la existencia y emisión del cheque (NM Noticias.CA, 2013).

Asimismo, más allá de los procedimientos legales que estaban por emprenderse en contra de connotados políticos conservadores, era un hecho que “las arcas conservadoras estarían en peligro en la medida en que los seguidores y adherentes del partido descubrieran en qué se usaban sus donaciones para apoyar al conservadurismo canadiense” (Boyer, 2014: 114). Aunado a lo anterior, la entrega del cheque y las revelaciones de Duffy dejaron muy expuesto al hombre más cercano de Stephen Harper, su jefe de gabinete, Nigel Wright, ya que si bien él se había mantenido hasta ese momento como una persona íntegra y de incuestionable honorabilidad, lo cierto era que pudo actuar pensando que hacía lo correcto, y que la recepción del cheque por parte de Mike Duffy traía implícita la discreción del senador (Boyer, 2014: 115).

En lo que corresponde al caso del senador Patrick Brazeau —el mismo que retara en 2012 a una pelea de box al entonces diputado liberal Justin Trudeau, en un suceso sin precedentes mediáticos—, este personaje enfrentó los mismos cargos que Duffy, pero además le agregaron acusaciones por violencia doméstica, conducir en estado de ebriedad y posesión de cocaína, mismas que ocasionaron su suspensión del Senado, sin contar con que además tuvo que continuar involucrado durante tres años en una serie de juicios legales que lo inhabilitaron para ocupar el cargo hasta finales de 2016, cuando resultó absuelto por decreto real de la Corona (CBC News, 2016a).

El caso de Pamela Wallin no es menos escandaloso, ya que esta senadora por Saskatchewan, quien al igual que Duffy fuera una periodista ampliamente conocida en Canadá, fue señalada por la auditoría general por defraudar fondos públicos y por falsear declaraciones al mantener su residencia en Ottawa y recibir viáticos y dinero para su subsistencia en Saskatchewan. Wallin,

al igual que sus colegas, fue suspendida de su cargo en noviembre y no sería sino hasta mediados de 2016 cuando sería absuelta (CBC News, 2016b). Es oportuno señalar que hubo otro caso similar con el senador liberal por Ontario, Mac Harb, quien a diferencia de sus pares conservadores decidió pagar de su bolsillo la cantidad supuestamente defraudada y renunciar al cargo, no sin antes acusar a las autoridades encargadas de la investigación de cometer un error, pues se encontraba convencido de su inocencia (*The Globe and Mail*, 2014).

Pese a esta serie de acontecimientos y resoluciones senatoriales para castigar a algunos de sus miembros descubiertos en evidentes actos de deshonestidad lo cierto es que, con excepción de Brazeau, a quien se le siguieron otra serie de acusaciones en torno a su comportamiento personal y social, y sin considerar la renuncia de Mac Harb, los otros dos senadores conservadores involucrados, Duffy y Wallin, retomaron su curul después de las elecciones federales de 2015, pues con la disolución parlamentaria para efectuar ese proceso electoral concluían también las resoluciones que los afectaban, dejando sin efecto las suspensiones de ambos.

A partir de su reincorporación, Mike Duffy y Pamela Wallin se sumaron a un grupo de senadores independientes cuya principal agenda ha sido construir plataformas apartidistas que garanticen el derecho de los miembros de la Cámara alta a no pertenecer a partido político alguno, y aun así formar parte de las distintas comisiones, en un intento organizado desde 2016 para que en el Senado no imperen las fracciones partidistas; lo anterior, en un claro esfuerzo de sobrevivencia política de cara a las reformas que nunca antes fueron más necesarias y evidentes como después de los escándalos de 2013.

Una muestra de ello son las encuestas levantadas por *The Washington Post* a finales de 2013, en las que alrededor del 65 por ciento de la población de Canadá opinaba que el Senado debía ser abolido o profundamente reformado. En contraste con sólo un 5 por ciento de los canadienses que se manifestaron para que la Cámara alta continuara funcionando como hasta entonces. Por su parte el 20 por ciento restante de los entrevistados aún no estaba seguro sobre qué posición asumir (*The Washington Post*, 2013). Ante este nivel de profunda crisis de credibilidad en uno de los pilares constitutivos del sistema político, el entonces líder del Partido Liberal y posterior primer ministro, Justin Trudeau, pidió a todos los senadores de su partido renunciar a su filiación partidista y actuar a partir de ese momento como independientes, con la intención de mostrar su firme compromiso de reformar a la Cámara alta.

Su argumento consistió en que el Senado debía elevarse como un instrumento que vigilara a la Cámara de los Comunes y revisara las leyes desde allí emitidas. Trudeau afirmó: “El Senado está roto y necesita arreglarse [...]. Si el Senado sirve a algún propósito, éste es el de vigilar el extraordinario poder del primer ministro y su oficina, especialmente en un gobierno mayoritario” (NM Noticias, 2014). Debe agregarse que esta acción de parte de Trudeau dejó sin efecto los llamados del Partido Neodemócrata para abolir el Senado de una vez por todas o permitir la elección de sus integrantes. Esta acción requería necesariamente someter la Constitución a nuevos debates, algo que el propio Justin Trudeau se negó a hacer con el argumento de que la ciudadanía no estaba dispuesta a ser testigo de interminables deliberaciones provinciales que terminarían distrayendo su atención de los verdaderos problemas del país (Boyer, 2014: 359).

Resulta evidente que la expulsión de los senadores liberales de su partido, así como la promesa de su liderazgo en el sentido de reformar la Cámara alta, fueron sucesos que generaron grandes expectativas entre la opinión pública, pues a partir de ese momento se esperaba la estrategia a seguir de parte de los liberales en el Parlamento de cara a las siguientes elecciones generales.

Empero, dichas expectativas no serían satisfechas del todo por el propio Trudeau una vez que alcanzó la primera magistratura tras su victoria electoral en octubre de 2015, pues se opuso la posibilidad de elegir a los miembros del Senado, y en su lugar se comprometió a nombrar senadores honestos de carácter independiente y sin filiación partidista. En buena medida, este último compromiso lo ha cumplido al nombrar a los nuevos senadores, los cuales no han sido miembros de ningún partido político, o en todo caso han decidido renunciar a su filiación de manera pública, y desde el Senado intentan proyectar una imagen diferente de la de sus antecesores (*The Hill Times*, 2017).

Ya en la Cámara alta los nuevos senadores y senadoras se incorporan a las filas de los legisladores independientes, y desde ahí discuten y buscan generar nuevas dinámicas parlamentarias con la Cámara baja, aunque, claro está, tales ejercicios son apenas los primeros bosquejos de un Senado que busca operar de manera diferente, pero que sigue sin convencer a sus detractores, “que reclaman desde hace mucho tiempo que el Senado canadiense, al no ser electo, es ilegítimo” (Smith, 2017: 181). Aunado a lo anterior, es un hecho que esta Cámara continúa haciendo lo mismo que desde hace siglo y

medio, es decir, opera como una herramienta de poder que se limita a atestiguar lo que se aprueba en la Cámara de los Comunes, que es en sentido estricto donde se discute y decide la política canadiense.

Quizá el ejemplo más claro de esta falta de iniciativa e independencia ante la opinión pública sea el caso de la propuesta de reforma C-51 (*Bill C-51*) a través de la cual el gobierno de Stephen Harper reformuló los criterios para buscar extender la seguridad interna del país frente a acciones de carácter terrorista. Esta polémica reforma vio la luz como consecuencia de una serie de incidentes acaecidos en 2014 en Canadá que involucraron a individuos afines a grupos terroristas del Medio Oriente. El acontecimiento que atrajo mayor atención nacional e internacional fue, sin duda, el tiroteo al interior del Parlamento en Ottawa el 22 de octubre, justo cuando el gobierno se encontraba reunido en sesión parlamentaria, incluido el primer ministro.

En este suceso, un individuo identificado con el extremismo islámico mató a un soldado que se encontraba montando guardia en un monumento a las afueras del Parlamento, para posteriormente ingresar disparando en el inmueble; ya en el interior, el jefe de seguridad del Parlamento logró abatirlo, evitando así mayores pérdidas humanas.

El trauma causado por este hecho sirvió para que el primer ministro Harper presentara un ambicioso programa de reformas en las materias de seguridad, agencias de inteligencia, leyes criminales, inmigración, refugio, seguridad de viajantes aéreos y combate al terrorismo, las cuales serían conocidas en inglés como *Bill C-51*¹⁵ y generarían gran polémica entre la sociedad civil.

Este paquete de reformas al sistema de seguridad generó acaloradas discusiones en la Cámara de los Comunes entre el gobierno y la oposición proveniente del Partido Neodemócrata y del Partido Verde, pero no así de parte del Partido Liberal, cuyos diputados la apoyaron y aprobaron en lo general. Este hecho puso de manifiesto, una vez más, los acuerdos fácticos entre liberales y conservadores, a pesar de la franca molestia expresada por amplios sectores de la sociedad civil canadiense, que veían amenazados sus derechos civiles debido a las extendidas atribuciones conferidas a las agencias de seguridad a partir de ese momento.

¹⁵ El nombre completo de esta iniciativa es *Bill to Enact the Security of Canada, Information Sharing Act and the Secure Air Travel Act, to Amend the Criminal Code, the Canadian Security Intelligence Service Act and the Immigration and Refugee Protection Act and to make related and consequential amendments to other Acts.*

Entre dichas facultades destacaban mayores márgenes de maniobra a los servicios de inteligencia para espiar y seguir, de manera encubierta, a todos los ciudadanos potencialmente sospechosos de cometer delitos en el país con la premisa de proteger los valores canadienses. Al mismo tiempo, dicha reforma permitiría la detención, sin orden judicial de por medio, de cualquier ciudadano (Parliament of Canada, 2016). Fue precisamente por eso que diferentes grupos civiles, académicos, universitarios y políticos afirmaron que las nuevas reformas aprobadas por liberales y conservadores atentaban contra los derechos y las libertades individuales constituidas previamente en el país, pues esta nueva ley criminalizaría en la práctica a todo individuo que protestara en contra del gobierno.

Lo anterior se concretaría gracias a que esta reforma, conocida también como Ley Antiterrorista de 2015, otorga a las agencias de seguridad de Canadá facultades discrecionales para espiar y señalar a cualquier ciudadano como un individuo que busca la desestabilización del Estado. En este sentido, resulta necesario precisar que es tan extensa que, efectivamente, puede criminalizar las protestas callejeras o limitar la libertad de expresión de los disidentes del gobierno y sus representantes. Así, cualquier persona podría ser espiada y detenida por agentes policíacos uniformados o encubiertos.

Fue por eso precisamente que una vez presentada esta propuesta de ley en 2015, la dinámica parlamentaria en la Cámara de los Comunes centró sus discusiones en cómo afectaría las garantías individuales y la libertad de expresión. En estos debates, el Partido Neodemócrata y el Partido Verde manifestaron su abierto rechazo por considerar que la iniciativa amenazaba las libertades civiles. Por su parte, como se mencionó, el Partido Liberal apoyó en general la moción del gobierno de Harper y terminó sumándose en mayo de 2015 al bloque conservador en su tercera lectura. Las críticas que generó esta acción liberal provocaron que el líder de ese partido, Justin Trudeau, saliera al paso y afirmara que su agrupación había hecho lo correcto porque actuaban en favor del mejor interés de los canadienses; además prometía que de llegar al poder buscaría garantizar completamente los derechos civiles de la ciudadanía (*Ottawa Citizen*, 2015).

Al fin de cuentas, los números en esa votación serían 183 votos a favor (liberales y conservadores) por 96 en contra (neodemócratas, verdes y Bloque Quebequense). Cabe añadir que en esta tercera lectura se dieron veintisiete abstenciones (trece conservadores, cinco independientes, tres liberales,

cinco neodemócratas y uno de Fuerza Democrática).¹⁶ Sin duda, la aprobación de tan controvertida ley expuso de nuevo los acuerdos parlamentarios fácticos existentes entre liberales y conservadores, que han operado de manera indistinta desde hace siglo y medio.

Ahora bien, lo más interesante es que una vez aprobada la Ley Antiterrorista por la Cámara de los Comunes, y de acuerdo con las mecánicas parlamentarias, fue turnada al Senado para su discusión, enmienda o ratificación. Este paso generó una serie de interrogantes sin precedentes en Canadá, ya que diversos sectores civiles hicieron llamados al Senado para que rechazara las reformas de ley por ser abiertamente impopulares (*Kil Bill C-51*, 2018); no obstante, siguiendo la ruta trazada por el espíritu tradicionalista y conservador de sus orígenes, reforzado a lo largo de siglo y medio de operaciones, el Senado aprobaría un mes después, sin modificación alguna, esta ley con cuarenta y cuatro votos a favor y veintiocho en contra, estos últimos básicamente de liberales independientes (*National Observer*, 2015).¹⁷

No obstante, la posición en contra de los senadores liberales independientes, lo cierto es que el Partido Liberal y su líder Justin Trudeau fueron muy criticados entre la opinión pública al fungir como soporte de una reforma abiertamente impopular. El posicionamiento de los senadores liberales independientes —que lo son a petición de su propio líder desde inicios de 2014— de poco sirvió para disminuir los cuestionamientos, ello debido sobre todo a su futilidad, dado su carácter minoritario en el Senado. Por ello, sus veintiocho votos en contra pudieron interpretarse más como una estrategia política para allegarse simpatía ciudadana y no como una postura firme y creíble que defendiera los derechos civiles. Esta aseveración se sustenta en que sus correligionarios en la Cámara de los Comunes, los cuales por cierto sí estaban en condiciones de frenar dicho plan de reformas en materia de seguridad, decidieron secundar la propuesta conservadora y sumarse a ella, aplastando por una clara mayoría al resto de los partidos opositores en la Cámara baja.

¹⁶ Para una revisión de la postura de cada uno de los diputados en esta votación, así como sobre su filiación partidista, puede consultarse openparliament.ca (2018a).

¹⁷ Debe recordarse que en enero de 2014, Trudeau decidió pedir a todos los senadores de su partido renunciar a su filiación y actuar a partir de ese momento como “liberales independientes”; ello, en un intento por ejercer presión para la reforma del Senado que viene discutiéndose en Canadá, sobre todo después de los escándalos por desvío de recursos y tráfico de influencias acaecidos durante el periodo 2012-2013, en los cuales, como ya se mencionó, fueron protagonistas algunos senadores conservadores.

Dicho todo lo anterior, sólo resta añadir que el Senado ha venido enfrentando su limitada operatividad y su carencia democrática. Es por eso que esta Cámara legislativa no resulta ser un ente atractivo ni mucho menos útil para la opinión pública, pues diferentes sectores sociales han venido cuestionando su existencia por considerarlo un organismo que, en términos prácticos, no tiene mayor función que la de cumplir con añejos protocolos.

Aunado a lo anterior, debe reconocerse que la Cámara alta canadiense en realidad no cuenta con los argumentos históricos que expliquen su pomposidad y parsimonia operativa, como sí sucede en Gran Bretaña con su Cámara de los Lores. Y es que quizá ahí sea precisamente en donde radica el principal problema para mantener el funcionamiento de una Cámara alta en cualquier otro modelo Westminster, más allá del propio Parlamento con sede en Londres, ya que justamente esta pieza del andamiaje institucional británico encuentra pocas justificaciones para seguir operando más allá de Inglaterra. Muestra de ello es que en Escocia, Gales e Irlanda del Norte el sistema de gobierno es unicameral, al igual que en Nueva Zelanda, país que con un claro espíritu democrático decidió prescindir del Senado por encontrarlo innecesario.

El caso de Australia es también muy interesante, pues las elites de ese país, si bien han mantenido la operación de su Senado, también resolvieron elegir mediante procesos democráticos a sus representantes en la Cámara alta, en un esfuerzo por dotarlos de legitimidad y cercanía frente a su sociedad y opinión pública; sin embargo, como se ha visto, Canadá es diferente por razones que vienen desde su fundación.

LA CÁMARA DE LOS COMUNES

En lo que corresponde a la Cámara baja canadiense o Cámara de los Comunes, a diferencia del Senado ésta opera como el eje central de la vida política del país. Su fortaleza reside en que sus miembros son electos por medio de procesos democráticos periódicos. Estos diputados, regularmente conocidos en el mundo anglosajón como MP (*Member of Parliament*) tienen un fuerte apego hacia el partido que los postuló, pues a diferencia del sistema estadounidense, el Westminster procura que el partido continúe siendo un elemento primordial en la política interna. De hecho, en Canadá la consi-

derable disciplina que guardan los comunes con su agrupación de origen provoca que un MP no entre en controversias con sus correligionarios ni con las iniciativas que de su bancada emanan (Malcolmson *et al.*, 2016: 125).

No obstante, a pesar de que el partido político y su líder en turno suelen dirigir los lineamientos de la bancada a la que un diputado pertenece, el MP debe saber expresar públicamente un apego hacia sus electores, pues de ellos depende su llegada y su permanencia en el cargo mediante reelecciones. Lo anterior hace muy difícil que los diputados logren trayectorias duraderas en la política, ya que éstas se sujetan en buena medida a una buena imagen pública del líder de su agrupación, lo que abre dos flancos para los MP: uno en el que deben obedecer y someterse a las directrices del dirigente vigente de su partido, y otro en el que sus acciones muestren franca empatía hacia sus electores con el fin de evitar crear una imagen de político ajeno a las problemáticas de sus representados y su comunidad de procedencia.

En este sentido, en el escenario político canadiense existen múltiples ejemplos de políticos connotados que pese a ser líderes de su partido a nivel nacional pierden su circunscripción electoral provincial al ser derrotados por un candidato de otro instituto que logró conectar más con la gente. Cuando eso sucede, el líder del partido debe contender en unas elecciones especiales, o *by-elections*, las cuales se realizan en alguna circunscripción electoral afín a su partido en donde un MP de su misma agrupación se sacrifica para otorgarle su asiento. Lo anterior es posible cuando el dirigente del partido en cuestión es designado como primer ministro, o en su defecto como líder de la oposición. Ello, porque el requisito más importante para ocupar un cargo de importancia recae en la capacidad para ganar y mantener un asiento en la Cámara baja.

Es importante señalar que en el momento en que una diputada o diputado logra ganar un escaño en la Cámara de los Comunes comienza a formar parte integral del organismo de toma de decisiones y se eleva como parte activa del *caucus* de su partido. Desde ahí el MP puede lograr el espacio mediático necesario para ampliar su imagen como una figura pública capaz de ir escalando posiciones, ya sea para afianzar su curul en la Cámara baja o para contender por el liderato de su partido cuando la situación sea propicia. Toda esta situación regularmente debe venir acompañada de una absoluta disciplina, ya que en Canadá el líder del partido incide de manera directa en su *caucus* para concretar las nominaciones a candidaturas para ocupar asientos

en la Cámara de los Comunes. Por eso los candidatos a MP deben manifestar un apego indudable a los lineamientos del partido al que pertenecen, pues eso permite que las organizaciones se muestren como entes bien organizados y cohesivos frente a los electores (Loat y MacMillan, 2014: 159).

Al igual que sus precedentes británicos, la Cámara de los Comunes en Canadá cuenta con un *speaker* o portavoz que funge como presidente de la Cámara y es el encargado de llevar a cabo las sesiones en orden y de acuerdo con los cánones anglosajones. Tal y como sucede en el Parlamento en Westminster, el *speaker* es electo de manera secreta entre los diputados con curul y tiene la obligación de renunciar a su filiación partidista de origen. En una costumbre que se remonta a los siglos XII y XIII en Inglaterra, como ya se señaló, el *speaker* es empujado levemente por sus compañeros en la Cámara de los Comunes para ocupar su cargo, ya que no pocos portavoces fueron ejecutados al manifestar malas noticias a los soberanos en turno en el pasado.

Sin embargo, esta costumbre nada tiene que ver con Canadá, aunque forma parte de esos “hábitos simbólicos o rituales graciosos cuya observación o suspensión no tiene impacto sustancial alguno en la operación de las reglas constitucionales” (Banfield, 2015: 190). Así como el anterior, existen otros tantos “hábitos simbólicos” que perduran en el parlamentarismo canadiense y no parecerían tener fecha de caducidad.

Ahora bien, en cuanto a las funciones del *speaker* sobresale su papel de enlace entre la Corona, el Senado y la Cámara baja; por ello, al tener que enfrentar distintos escenarios protocolarios, el *speaker* cuenta con asistentes, quienes son MP electos por la propia Cámara para suplirlo cuando éste se vea imposibilitado de asistir a determinadas sesiones. El lugar que le corresponde en el recinto legislativo es la cabecera del Parlamento, entre las dos bancadas, sobre una tarima que lo eleva del resto de sus compañeros.

Entre las limitadas atribuciones de un *speaker* pueden contarse su capacidad para emitir el voto de desempate, aplicado a casos extremos en que la Cámara baja no logre destrabar algún asunto. En realidad es muy complicado que se presente esta situación, ya que se requieren muchos factores para que los diputados de las distintas fracciones representadas en el Parlamento coincidan en un 50 por ciento a favor y el otro 50 en contra en algún tema delicado.

Por otro lado, un personaje de especial importancia en la liturgia parlamentaria anglosajona es el *Sergeant-at-Arms*, quien se ubica en una pequeña mesa en el otro extremo del recinto, de frente al *speaker*. Este individuo es

el encargado de la seguridad en la sala;¹⁸ no obstante lo sucedido en Canadá en 2014, el *Sergeant-at-Arms* es en realidad el protagonista de una tradición protocolaria que consiste en abrir las sesiones parlamentarias con un acto ceremonial en el cual camina lentamente por la sala cargando un gran mazo dorado, símbolo de la autoridad emanada del pueblo y conferida a los MP.

En cuanto a la conformación de los integrantes del recinto, tiene que señalarse que a partir de las elecciones federales de 2015 el número de asientos en la Cámara de los Comunes se incrementó, al pasar de 308 a 338. Dicha sede repite los hábitos y operaciones simbólicas de la Cámara alta, ya que la fracción gobernante se sienta en el ala derecha del *speaker*, mientras que la oposición se agrupa en su extremo izquierdo, de frente a sus adversarios políticos. Debajo del *speaker*, dándole la espalda y vestido con una túnica negra se ubica, en la cabecera de una mesa, el secretario de la Cámara (o *clerk* en inglés), quien debe ser un experto en los procedimientos parlamentarios y es asistido por dos ayudantes. A diferencia del *speaker*, el secretario o *clerk* no debe su presencia en el recinto a haber ganado una curul en la elección federal, sino que más bien su trayectoria es burocrática y administrativa, como funcionario del Parlamento.

Debido a su larga experiencia en procedimientos parlamentarios, el *clerk* o secretario funge como el principal asesor del *speaker* y debe encontrarse disponible para apoyar a todos y todas las diputadas que así lo requieran. En este sentido, un secretario de la Cámara baja debe hacer manifiesta su ausencia de filiación partidista, pues su labor está más orientada a procurar que la compleja maquinaria de los procedimientos funcione correctamente en cada sesión, eliminando los obstáculos en la rutina parlamentaria del día a día.

Al igual que como sucede en los demás parlamentos con modelo Westminster, el primer ministro ocupa un asiento más en el recinto y recibe las críticas y observaciones a su gestión en cada intervención, estimulando así el debate público de temas de interés. Lo anterior es posible gracias a que existe un sitio específico para la prensa acreditada en el lugar, la cual se ubica

¹⁸ Es necesario mencionar que en el tiroteo registrado al interior del Parlamento canadiense en octubre de 2014 fue precisamente el *sergeant-at-arms*, Kevin Michael Vickers, junto con otro miembro de la Real Policía Montada, el encargado de abatir al autor del atentado en un hecho sin precedentes, ya que la labor del Mazo había sido principalmente de carácter ceremonial. Pese a ello, y por desempeñarse también como jefes de seguridad del recinto, los *sergeant-at-arms* suelen ser expolicías con entrenamiento y experiencia en el uso de armas. Por lo tanto, debe quedar claro que no es un MP electo, sino más bien un funcionario designado por el representante de la Corona, es decir, el gobernador general.

en un angosto balcón justo a espaldas del *speaker*. También es necesario señalar que al igual que en la Cámara alta, el recinto de los Comunes reserva algunas filas para el público que se acomoda en una especie de gradas, justo detrás del sitio que se reserva para los periodistas, los cuales, debe añadirse, desarrollan un conocimiento certero acerca de los complejos procedimientos parlamentarios que deben hacer entendibles al resto de la población.

En lo que corresponde a los ministros o miembros del gabinete, éstos deben ser MP electos y formar parte del partido gobernante. Esto último ya que las autoridades canadienses se han rehusado a conformar gobiernos de coalición, por lo que los diputados designados para encabezar un ministerio tienen ante todo un apego partidista hacia su líder de bancada y primer ministro. De hecho, “la disciplina partidista garantiza que el gabinete mantenga siempre un número suficiente de votos para proteger su propia posición en el poder” (Malcolmson *et al.*, 2016: 124-125).

Sin embargo, este dominio del partido sobre el individuo en Canadá ha llegado a niveles mayúsculos debido al estilo particular de los primeros ministros más dominantes sobre sus MP. De hecho, “hay quienes creen que el sistema político se está moviendo en la dirección equivocada [...], pues [algunos] primeros ministros, ya sea azules [conservadores] o rojos [liberales], actúan frecuentemente más allá de lo debido” (Loat y MacMillan, 2014: 24).

Aunado a lo anterior debe considerarse que la labor de los ministros de gobierno en el sistema Westminster triplica su trabajo, ya que sin importar sus responsabilidades como funcionarios gubernamentales, el MP integrante del gabinete es al mismo tiempo diputado (por lo tanto, debe legislar sobre asuntos a nivel nacional), ministro (y por ello debe encabezar la agenda de su ministerio) y representante de su circunscripción electoral (con la obligación de mantenerse al tanto de sus representados).

En la actualidad se han desarrollado tres principios básicos para todo ministro de gobierno: 1) deberá mostrar lealtad y defender las decisiones del gabinete de manera decidida, 2) un ministro no sólo no debe criticar públicamente a un colega del gabinete sino que además debe defenderlo abiertamente frente a sus críticos y 3) un ministro no deberá expresar de manera pública opiniones personales acerca de las políticas de gobierno (Banfield, 2015: 196). Todo lo anterior debe conjugarse con una imagen pública favorable, pues ante todo su posición en el gobierno depende no sólo de la aprobación del primer ministro, sino también de sus electores, quienes pueden

darle la espalda en el siguiente proceso electoral, lo que significa probablemente el fin de su carrera política. Es por esta situación que al final de cuentas un MP no debe desconectarse del todo de su base electoral, pues de ellos depende y ante ellos responde.

Ahora bien, en lo que corresponde a las labores y responsabilidades de gobierno, la Cámara de los Comunes divide sus agendas en veintisiete comités especiales, desde los cuales hace el seguimiento de los proyectos gubernamentales. Entre los comités de mayor importancia sobresalen los de Servicio a Veteranos de Guerra, Agricultura, Comercio, Ciudadanía e Inmigración, Medio Ambiente, Reformas Electorales, Equidad, Asuntos Exteriores, Estado de la Mujer, Finanzas, Pesca, Salud, Asuntos Indígenas, Industria, Ciencia y Tecnología, Derechos Humanos, Defensa Nacional, Cuentas Públicas, Seguridad y Transporte, entre otros.¹⁹

En realidad la labor de los comités es primordial, ya que son los encargados de planificar los objetivos de gobierno. Su importancia radica en que desde allí, es decir, en cada Comisión, se proponen soluciones o cambios a los proyectos que son turnados al Pleno de la Cámara de los Comunes para su posterior discusión. De acuerdo con este esquema se busca alcanzar consensos mediante la negociación con los MP de otras agrupaciones, quienes también integran las comisiones. Precisamente, ahí suceden importantes ejercicios de *lobby* o cabildeo previos a la dinámica del contraste de ideas en el Parlamento (Sturgis, 2016: 175). Es por ello que los trabajos de los comités son engranajes indispensables en el buen accionar del parlamentarismo canadiense.

Por otro lado, dentro de este esquema de mecanismos específicos necesarios para el funcionamiento del gobierno parlamentario en Canadá debe incluirse la figura del “gabinete en la sombra”, integrado por miembros del Parlamento del principal partido opositor que son los encargados de dar seguimiento a las acciones de la administración. Se trata de diputados que “adoptan” un ministerio específico y desde ahí se concentran en estudiar las políticas públicas emprendidas por la entidad respectiva. El objetivo principal es exponer en los debates parlamentarios los errores y/u omisiones en la ejecución de parte del titular del ministerio en cuestión. Es por eso que este gabinete en la sombra debe mantener un sentido crítico, para así hacer pública la posición del partido antagonista y de este modo puedan identificarse y con-

¹⁹ Para mayor información y para consultar asuntos específicos de cada Comité puede verse, Parliament of Canada (2018b).

trastarse las posturas de los dos mayores partidos políticos representados en el Parlamento.

Desde luego que el anterior ejercicio ha servido en términos prácticos para darle espacios mediáticos al principal partido opositor, pues éste expresa de manera abierta una visión contraria a las acciones de gobierno ya en marcha, además de que ofrece sus propias alternativas y propuestas de solución que son recibidas por la opinión pública para que emita su juicio. Todo esto ha servido para mantener a los políticos en el centro del debate nacional, contrastando visiones y opiniones, generalmente entre liberales y conservadores, situación que los separa del resto de los partidos, los cuales carecen de los mecanismos institucionales necesarios para hacer escuchar su voz con fuerza.

No obstante, debe señalarse que la creación de un gabinete en la sombra tuvo en sus orígenes británicos otras intenciones, ya que desde ahí se buscó que la oposición hiciera un escrutinio detallado de las acciones del primer ministro y su administración para mantener informado al monarca acerca de lo acontecido en el país y del impacto del gobierno entre sus súbditos. Es por eso que el gabinete en la sombra era una de las responsabilidades que debía atender el soberano de manera directa, pues era el mejor mecanismo para enterarse de cualquier malestar popular. Por esa razón, la cabeza de la primera minoría en el Parlamento es conocido como “líder de la leal oposición de su majestad”, un ejemplo más de cómo las tradiciones que se remontan a siglos de antigüedad en Gran Bretaña fueron adaptándose y evolucionando en Canadá hacia nuevas formas sincréticas en donde conviven el pasado y el presente.

Es cierto también que lo anterior puede considerarse resabios de prácticas anacrónicas de un imperio en decadencia que se niega a desaparecer, y que por eso se aferra a tales usos y costumbres como un mecanismo de defensa, sobre todo ante el avance que experimentó el federalismo en el modelo estadounidense a partir de la segunda mitad del siglo xx; sin embargo, resulta necesario subrayar que dicho modelo, pese a todo, descende de y comparte hábitos con los británicos heredados de su época colonial.

Para el caso canadiense, mucho se ha hablado y escrito acerca de la posibilidad de separar al Parlamento de la Corona británica. En tal sentido, debe recordarse lo expresado ante el Pleno por James Jerome, *speaker* de la Cámara de los Comunes durante el periodo 1974-1979, alocución que ya es considerada clásica en la cultura política parlamentaria del país:

¿Sería posible concebir algún proceso en el que algún funcionario canadiense electo pudiera ser llamado por nosotros presidente en lugar de gobernador general, y que ello nos diera la certeza de que tiene todo el poder y la autoridad que conocemos actualmente y que reside en el monarca? La respuesta, por supuesto, es que cualquier híbrido es poco probable. Sería casi imposible injertar esa característica en nuestro sistema parlamentario. Si se intentara, requeriría una revisión constitucional total (Tidridge, 2011: 63).

Lo anterior resulta por demás interesante en la medida en que permite observar con claridad el hondo carácter conservador de la política canadiense, pues el extracto señalado es considerado una de las intervenciones más elocuentes en defensa del sistema prevaleciente en Canadá y su apego cercano al más tradicionalista espíritu Westminster del mundo moderno. Incluso más allá de la tendencia conservadora que domina el ánimo político de la nación, es un hecho que los MP votan en sentido estricto por lo que les indican sus líderes de partido, más allá de sus opiniones personales, lo que se agrava si existe una tendencia conservadora que domine a las cúpulas partidistas. Es en sentido estricto un ejercicio en el que el representante vota como autómatas sin estudiar a fondo el impacto de su voto (Rathgeber, 2014: 66-77).

Si bien el sistema político canadiense puede considerarse anacrónico o muy tradicional, lo cierto es que ha logrado sobrevivir y mantenerse operando durante más de siglo y medio, lo que lo convierte en uno de los más antiguos y funcionales del continente americano, sólo después del estadounidense. Esta situación obedece, sin duda, a que sus dinámicas tienen orígenes muy antiguos en Gran Bretaña, aunque es verdad que han logrado mutar y adaptarse a las nuevas realidades del mundo moderno, otorgándole estabilidad y gobernabilidad a ese vasto territorio.

En este marco de estabilidad constante en Canadá, de 1867 a 2015 se han celebrado cuarenta y dos elecciones federales de forma ininterrumpida, de las cuales han emanado veintitrés administraciones, con trece primeros ministros conservadores y diez liberales. Jamás ha ocurrido un magnicidio de primer ministro, todas las administraciones han llegado a su fin de manera pacífica, y cuando algún mandatario muere en funciones existe todo un andamiaje constitucional que permite, ya sea concluir la gestión original o bien convocar a nuevas elecciones. Todo lo anterior se ha dado de manera ordenada y en paz.

Como garantes y observadores de todos estos procesos políticos internos se ubican los veintinueve gobernadores generales que han ocupado dicho encargo en Canadá de 1867 a 2018. Estas figuras poseen amplios poderes, pero disponen de mecánicas discrecionales operativas que los mantienen en un bajo perfil. Suelen permanecer en sus oficinas y viven de manera discreta, evitando exponer su imagen ante la opinión pública. Por lo regular entran en la arena política sólo cuando el sistema se encuentra frente a un reto que pone en jaque la gobernabilidad y favorecen al primer ministro en funciones como jefe de gobierno. Esto último ha provocado que la figura del gobernador general haya recibido críticas sin precedentes en Canadá en los años recientes (McWhinney, 2005: 18), sobre todo a partir de la prórroga parlamentaria emitida por la gobernadora general Michaëlle Jean en diciembre de 2009, para evitar que el primer ministro fuera sustituido de su cargo por la mayoría opositora, caso que se abordará en el apartado siguiente.

Volvamos al caso de la Cámara de los Comunes: es evidente que ese nivel de gobierno es el único mecanismo cuyo poder se extiende hacia todos los campos de interés nacional, convirtiéndolo en el eje principal de la vida política. Ahí se discuten las reformas, se aprueban o se rechazan. Para alcanzar a aprobar una ley, el gobierno en turno requiere de una mayoría simple de 50 por ciento más uno en esta Cámara, situación que no es complicada cuando se encabeza un gobierno de mayoría. Esta realidad puede resultar paradójica para la democracia, ya que un gobierno de mayoría puede aprobar todo tipo de leyes sin importar sus alcances, puesto que la oposición se encuentra imposibilitada legalmente para impedir reformas de gobierno, y su actividad se limita a denunciar de manera pública, a través de los debates parlamentarios, los posibles impactos de enmiendas aprobadas de forma automática por un gobierno de mayoría, los cuales, por cierto, no suelen obtener el 50 por ciento más uno del total de los votos de la ciudadanía, gracias al sistema uninominal *first past the post*. Un paradigma claro de ello son las elecciones federales de 2015, en las que el Partido Liberal obtuvo 184 asientos (54.4 por ciento de la composición de la Cámara), producto del 39.5 por ciento de la votación; el Partido Conservador noventa y nueve curules (29.2 por ciento) tras obtener 31.9 por ciento de los sufragios; el Partido Neodemócrata cuarenta y cuatro escaños (13 por ciento) y el 19.7 de las preferencias electorales; el Bloque Quebequense diez lugares (2.9 por ciento) con sólo el 4.6 de los votos emitidos, y el Partido Verde un espacio (0.29 por ciento), proveniente del 3.4 por ciento de la votación.

Es por ello que cuando se estudia el modelo canadiense, regularmente se mencionan las mayorías parlamentarias falsas. Por ejemplo, si se tomara en consideración el porcentaje del voto popular, tal y como sucede en otros países anglosajones con modelo Westminster (Australia y Nueva Zelanda), la mayoría alcanzada por los liberales en 2015 en Canadá no sería tal, pues tendrían sólo 134 asientos (lo que se traduce en el 39.6 por ciento de las curules), los conservadores 108 (32 por ciento), el Partido Neodemócrata 67 (19.8 por ciento) y el Bloque Quebequense 16 (4.7 por ciento). El caso más sobresaliente sería el del Partido Verde, pues según el esquema señalado habrían alcanzado once curules en lugar de únicamente una.²⁰ En este sentido en el cuadro 1 se evidencian las contradicciones de mantener y operar el actual sistema electoral canadiense, ya que resulta claro que las mayorías parlamentarias vigentes son recursos que permiten la gobernabilidad.

CUADRO 1
ASIENTOS Y PORCENTAJES EN LA CÁMARA DE LOS COMUNES
SEGÚN EL SISTEMA *FIRST PAST THE POST* (FPP) Y SIN DICHO SISTEMA
EN LAS ELECCIONES FEDERALES DE OCTUBRE DE 2015

	<i>Asientos obtenidos (FPP)</i>	<i>Porcentaje asientos (FPP)</i>	<i>Asientos sin sistema FPP</i>	<i>Porcentaje de asientos sin FPP</i>	<i>Porcentaje de votos nacional</i>
Partido Liberal	184	54.4	134	39.6	39.5
Partido Conservador	99	29.2	108	32.0	31.9
Partido Neodemócrata	44	13.0	67	19.8	19.7
Bloque Quebequense	10	2.9	16	4.7	4.6
Partido Verde	1	0.3	11	3.2	3.4

FUENTE: Elaboración propia con datos de Elections Canada (2018).

Un dato que bien vale la pena mencionar es que en el sistema Westminster, el Parlamento canadiense requiere, desde 1963, que al menos se co-sigan doce asientos en la Cámara de los Comunes para que un partido político obtenga el estatus de partido oficial, lo que le permite tener mayores estipendios a sus diputados, que consisten en cuatro mil dólares canadienses para cada uno. También le corresponderían mayores recursos al partido de acuer-

²⁰ Estas cifras y porcentajes son de elaboración propia de acuerdo con datos obtenidos de Elections Canada (2018).

do con su proporcionalidad parlamentaria, y lo más importante, la posibilidad de cuestionar al primer ministro en las sesiones de preguntas y respuestas (Parliament of Canada, 2018c). Esto último permite al partido y a sus diputados mostrar sus agendas políticas e ideológicas a través de los medios de comunicación acreditados de forma permanente en el recinto legislativo.

Otro dato importante por considerar es que, de cualquier manera, los gobiernos de minoría en Canadá suelen sobrellevar sus gestiones gracias a su capacidad de negociación con otras agrupaciones políticas presentes en el Parlamento. Desde ahí estas alianzas parlamentarias de corta duración llevan adelante, de forma pragmática, diversos proyectos o reformas apremiantes para el gobierno de minoría en turno; no obstante, también debe añadirse que cuando estas negociaciones no alcanzan el éxito deseado aceleran la caída de dichas administraciones minoritarias, tal y como sucedió con el primer ministro Paul Martin en noviembre de 2005, cuando él mismo decidió no establecer compromisos públicos de mayor inversión al gasto social, como lo exigía el Partido Neodemócrata (NDP) como condición para apoyarlo en el cargo. Este caso particular provocó que el NDP decidiera alinearse con los conservadores y el Bloque Quebequense para derrumbar al gobierno liberal minoritario y adelantar las elecciones (Jeffrey, 2010: 579-580). Lo anterior aceleró la salida del Partido Liberal del poder después de trece años de gobierno consecutivos con dos primeros ministros distintos (Jean Chrétien y Paul Martin).

De esta forma, si tomamos en consideración los elementos expuestos, resulta claro que el ejercicio del poder en Canadá depende en buena medida de la capacidad del primer ministro para constituir una ruta de gobierno, ya sea siguiendo un esquema de minoría o uno de mayoría parlamentaria. Es por ello que un gobierno minoritario en Canadá no suele extenderse más allá de dos años y medio, que es el tiempo promedio en el que las alianzas se agotan, o bien cuando la gestión alcanza mayor visibilidad y puede consolidarse como mayoría en unas siguientes elecciones.

Ahora bien, una vez instalado en el sitio de primer ministro de un gobierno de mayoría, el líder del partido en el poder alcanza una capacidad de acción muy extensa que lo convierte en un caudillo imbatible en el escenario político, y quien durante su gestión no pocas veces es objeto de “culto a la personalidad”. “La autoridad del primer ministro se consolida por su irrestricto poder de nombramiento de funcionarios de todos los niveles. [Su po-

der] empequeñece la importancia de todas las demás oficinas del gobierno”. (Rathgeber, 2014: 116-117).

Por todo lo anterior, la Cámara de los Comunes se ha venido transformando desde la segunda mitad del siglo xx en la sede que alberga al gran potentado de la política del país. Desde ahí Canadá ha sido testigo de la actuación de primeros ministros hegemónicos, que no sólo dominan su bancada, su partido y al gobierno, sino que además, como se ha visto, poseen atribuciones constitucionales para nombrar a discrecionalidad todos los más altos cargos de la administración. Toda esta dinámica rodea al primer ministro de individuos leales y afines a su gestión, en donde prevalece sobre todo la amistad o la gratitud por la encomienda (Smith, 2018).

De acuerdo con lo anterior, uno de los ejemplos más recientes en donde un primer ministro alcanzó un inmenso nivel de poder y emprendió acciones avasallantes en contra de sus contrincantes políticos —no sólo con los de otros partidos sino también con los de su misma agrupación— lo es sin duda alguna el de Stephen Harper, quien desde 2003 se elevó como la figura conservadora más poderosa del país, y de 2006 a 2015 en uno de los mandatarios más verticales y duros en la historia de Canadá. Sus críticos afirmaban que incluso había adoptado alegremente la tradición de la provincia de Alberta de atacar a sus enemigos con antorchas y horcas. Por su parte, sus allegados aseguraban que a él le gustaba jugar a la política estirando la cuerda hasta el límite permitido por las reglas, lo que de una u otra forma estimulaba a sus colaboradores más cercanos a cruzar las líneas éticas o legales en su deseo de ganar para el jefe (Bourrie, 2015: 304-306).

Y es que Harper ha sido uno de los políticos canadienses con mayor habilidad para manejar las dinámicas y los tiempos parlamentarios para mantenerse en el poder hasta su derrota en las elecciones federales de 2015. Es por ello que las estrategias que llevó a cabo en dicho periodo merecen un estudio aparte, tal y como lo haremos a continuación, pues desvelan las grandes áreas de oportunidad que se mantienen en la arena política del país.

Para concluir este apartado debe añadirse que este empoderamiento de la figura del primer ministro en Canadá se da gracias a los amplios periodos en que el Parlamento se encuentra sin funcionar, ya que al año suele haber solamente entre 120 y 130 sesiones, con excepción de cuando se convoca a elecciones federales adelantadas o programadas por la ley electoral, lo que acorta aún más los días de labores. También regularmente se suspenden trabajos

legislativos de una a dos semanas por mes para permitir que los diputados atiendan sus agendas provinciales. Asimismo, se cuenta con una temporada de asueto en los meses de julio y agosto, y otra en invierno, la mayor parte de diciembre y de enero (Parliament of Canada, 2018d).

Todo lo anterior coadyuva a que el primer ministro en turno asuma el control político del país, situación que se agudiza cuando encabeza un gobierno de mayoría, pues en este caso los jefes de gobierno suelen atrincherarse con cerca de cien colaboradores y varios astutos asesores de manera permanente, quienes lo aconsejan para resolver todo tipo de avatares, brindándole alternativas políticas de impacto.²¹

Principales acciones parlamentarias durante la gestión del primer ministro Stephen Harper: prórrogas, coaliciones y acuerdos partidistas

La gestión de este primer ministro marcó la política de diversas formas, sobre todo por el hábil manejo de los tiempos legislativos durante su gestión, tanto desde un gobierno de minoría en el periodo 2006-2011, como a lo largo de su administración mayoritaria, de 2011 a 2015. Desde su irrupción en escena como diputado del extinto Partido Reformista, lo más cercano a la extrema derecha canadiense, a principios de la década de los noventa Harper manifestó poseer iniciativas propias y el talento necesario para cuestionar la habilidad de su líder de bancada, el cristiano evangélico Preston Manning, quien además era el fundador de dicha agrupación. Este conflicto obligó a Harper a renunciar a la fracción reformista y a su sitio como miembro del Parlamento, ya que, como se ha visto, la disidencia al interior de un partido se tolera poco en Canadá y constituye el camino más viable hacia el destierro político.

Sin embargo, una serie de desatinos en la dirigencia del Partido Reformista llevó a Preston Manning a ser cuestionado por muchas de sus bases, las cuales reconocieron en Harper al personaje cuya visión contemplaba la unificación de las derechas alrededor de un partido político único.²² Así fue

²¹ Para mayor información de cómo opera la oficina del primer ministro puede consultarse Rathgeber (2014: 125-134).

²² Es oportuno señalar que en esos momentos existían tres agrupaciones partidistas de derecha en Canadá: el Partido Conservador Progresista (con amplias bases en las provincias centrales y en las del Atlántico), el Partido Reformista (con bases de apoyo considerables en las planicies

ascendiendo como figura pública, primero tras alcanzar el liderazgo del Partido de la Alianza Conservadora Canadiense en 2002, y un año después, al lograr unificar a las derechas del país en torno a una nueva agrupación, el Partido Conservador de Canadá, del cual él mismo se reconoce como su fundador.

Todo eso lo logró gracias a una serie de estrategias que involucraron tanto a algunos MP de la Alianza Conservadora como del Partido Conservador Progresista, quienes decidieron establecer una agenda de unidad en la Cámara de los Comunes con el fin de hacerle frente a los gobiernos mayoritarios de extracción liberal que dominaban en aquellos años la política interna del país. Una vez establecida la unión de los dos partidos conservadores en torno a una nueva agrupación, Stephen Harper fue electo líder del nuevo partido, lo que al mismo tiempo lo convertía en el líder de la oposición en el Parlamento, ya que los conservadores eran la primera minoría en ese momento.²³

Las elecciones generales de 2004 fueron su primera gran oportunidad, ya que su nuevo partido alcanzaría las noventa y nueve curules, esto es, veinticuatro más que en la legislatura anterior, consolidándose como la segunda fuerza política, sólo después de los liberales, que habían menguado su presencia en la Cámara baja teniendo que conformarse con una débil minoría de 135 asientos. Esta situación le ofreció la oportunidad de presionar al gobierno del primer ministro Paul Martin, que se encontraba en medio de una serie de acusaciones e investigaciones sobre desvío de recursos y tráfico de influencias de parte de miembros connotados del gobierno de su antecesor y correligionario, Jean Chrétien.

Esta serie de acontecimientos proyectaron una imagen negativa del gobierno liberal frente a los ciudadanos, situación que fue bien aprovechada por Stephen Harper, quien en su calidad de líder de la oposición buscó generar los acuerdos necesarios con los dirigentes de las otras dos agrupaciones opositoras representadas en el Parlamento para adelantar las elecciones. A partir de esta estrategia, exigió al primer ministro la renuncia de varios de sus colaboradores, cuyos nombres habían sido ventilados de manera pública durante los procesos de investigación en curso. Todo este proceso contó con el apoyo de los líderes neodemócratas y del Bloque Quebequense, los cua-

y en el oeste canadiense) y el Partido de la Alianza Conservadora Canadiense, que tras su nacimiento en 2000 se perfilaba como el sucesor del Partido Reformista.

²³ Para una mayor información sobre este proceso de unificación del conservadurismo canadiense alrededor de la figura de Stephen Harper, consúltese Flanagan (2009a).

les se mantenían alineados a las propuestas lanzadas por el líder conservador de la oposición.

Uno de los momentos de mayor tensión para la mayoría opositora durante esta etapa fue la propuesta del gobierno liberal conocida como *Bill C-38*, que pretendía legalizar los matrimonios entre personas del mismo género, ya que el Partido Neodemócrata y el Bloque Quebequense se habían manifestado a favor, lo que dejaba al Partido Conservador y a su líder ante la posibilidad de tener que distanciarse de los demás partidos de la oposición. Ante ello, Stephen Harper pidió a sus diputados y diputadas votar en favor de lo que su conciencia les dictara, decidiendo con ello de manera abierta renunciar a cualquier intento por bloquear o criticar dicha propuesta de ley. Esto lo llevó a declarar públicamente: “Quiero señalar que los miembros de mi partido, incluidos los de nuestro gabinete en la sombra, son perfectamente libres de votar de acuerdo con su conciencia sin mi interferencia” (*openparliament.ca*, 2018b).

Dicha acción sirvió para evitar confrontaciones innecesarias con los otros dos líderes de la oposición, ya que ambos, Jack Layton (del Partido Neodemócrata) y Gilles Duceppe (del Bloque Quebequense), se habían manifestado públicamente en favor de la propuesta C-38. Ello permitió que esta Ley terminara aprobada por mayoría con votos liberales, neodemócratas y del Bloque Quebequense, quedando sólo algunos diputados liberales y los conservadores como los únicos contrarios a ella. Lo más sobresaliente de esta estrategia de Harper fue que gracias a su neutralidad el debate en torno a la C-38 no polarizó a la opinión pública ni tampoco lo expuso como un político intolerante ante un sector del electorado.

Una vez puesta en marcha esta Ley, el líder de la oposición optó por esperar a que la alianza entre neodemócratas y liberales terminara fracturándose, ya que el político del NDP (Jack Layton) era consciente de la debilidad del primer ministro liberal (Paul Martin), y por ello empujaba fuertemente en favor de incrementar el gasto público en el corto plazo, además de que los neodemócratas buscaban a toda costa evitar la legalización de las compañías aseguradoras médicas privadas con la clara intención de inhibir ese tipo de inversión en dicho sector (Jeffrey, 2010: 579-569).

Este elemento terminó por acorralar al primer ministro, pues se negó a mantener su alianza con los neodemócratas ya que sus demandas le parecían excesivas. A partir de ese momento Stephen Harper, en su calidad de líder de la oposición, se reunió con el líder del NDP y le propuso ir juntos, al

lado del Bloque Quebequense, para emitir un voto de falta de confianza en contra del mandatario liberal, a lo que finalmente accedieron. El propio Paul Martin señala que ese momento fue definitorio para su futuro político, ya que juntos el NDP y el Partido Liberal contaban con 151 asientos, mientras que los conservadores y el Bloque Quebequense alcanzaban 153, además de los tres diputados que se habían declarado como independientes. Todo lo anterior generaba un delicado equilibrio que para mantenerse requería todos y cada uno de los votos (Martin, 2008: 429).

Resulta necesario mencionar que en el sistema Westminster que opera en Canadá existen tres formas de adelantar elecciones federales: dos desde la mayoría opositora y una más desde un gobierno minoritario. Desde la mayoría opositora los partidos pueden solicitar elecciones adelantadas al representante de la Corona (gobernador general) para que éste clausure el Parlamento y las convoque. Las dos vertientes para hacer tal petición son: emitir un voto de censura al primer ministro o propiciar un voto de falta de confianza. La primera opción expresa públicamente el desacuerdo de la mayoría opositora con el gobierno, y por ello solicitan la posibilidad de removerlo mediante un proceso electoral tras considerar su gestión como ineficiente. La segunda alternativa es más delicada políticamente, ya que expresa que la mayoría parlamentaria ha dejado de creer en la buena voluntad del primer ministro y, por ello, solicitan su remoción y nuevos comicios para elegir uno nuevo.

La tercera posibilidad para adelantar elecciones viene desde el propio gobierno de minoría. En esta vertiente el primer ministro solicita de manera directa al gobernador general dislocar el Parlamento para convocarlas, por considerar que la mayoría opositora obstaculiza y frena de manera intencional una serie de reformas de vital importancia para la buena marcha del país. Este tipo de llamados a comicios se concretan sólo cuando el primer ministro considera que se encuentra en posibilidades de incrementar sus curules en la Cámara de los Comunes, después de analizar los números de las casas encuestadoras.

Para volver al tema de las elecciones adelantadas de 2006, es preciso comentar que al final de cuentas el voto de falta de confianza que expresó el NDP significó su alianza con los conservadores para derribar al gobierno liberal, el cual ya no tuvo el mínimo margen de acción y se vio obligado a someterse a un nuevo proceso comicial anticipado. Es oportuno señalar que el propio Harper había declarado meses antes que él no intentaría forzar una elección adelantada si no contaba con el apoyo total del NDP (Flanagan, 2009b: 228).

Una vez alcanzado el acuerdo con el NDP, Stephen Harper, en su papel de líder de la oposición, efectuó la solicitud oficial a la gobernadora general Michaëlle Jean, quien clausuró el Parlamento y lanzó la convocatoria para nuevas elecciones federales a celebrarse en enero de 2006. Lo anterior lo dejó en la antesala de la primera magistratura gracias a su capacidad negociadora con las demás fuerzas de la oposición.

En dichas elecciones el resultado favoreció al Partido Conservador, que obtendría 124 asientos, contra 103 de los liberales, 51 del Bloque Quebequense y 29 del Partido Neodemócrata.²⁴ Si bien tales números daban la victoria a los conservadores, otorgándoles la primera magistratura del país, lo cierto es que ese gobierno sería de minoría. Por ello Stephen Harper puso en marcha, ya como primer ministro, una compleja estrategia de sobrevivencia política, amparándose en las propias dinámicas parlamentarias canadienses que están diseñadas para favorecer la conservación de los gobiernos minoritarios.

Entre sus acciones más sobresalientes en este periodo sobresalen: reducir de cinco a cuatro años los periodos de los gobiernos de mayoría; con esta reforma parlamentaria avalada por la mayoría opositora, el nuevo primer ministro buscó enviar el mensaje de que él intentaba democratizar el sistema al evitar largos periodos de gobierno para administraciones mayoritarias. Al mismo tiempo, dejó abierta la posibilidad de que la mayoría opositora pudiera solicitar al gobernador general elecciones adelantadas en cualquier momento. Cabe destacar que en el marco de todas estas reformas se comprometió a no pedir comicios anticipados desde su administración minoritaria, con el fin de privilegiar las reformas necesarias en materia presupuestaria y concentrarse en disminuir los impuestos a bienes y servicios, que era justamente una de sus más ambiciosas propuestas de campaña.

Al mismo tiempo, la animadversión que se profesaban neodemócratas y liberales al interior de la Cámara de los Comunes, al responsabilizarse mutuamente por la llegada de los conservadores al poder, fue un factor que el gobierno de Harper supo aprovechar ya que, sacando ventaja de las divisiones internas del Partido Liberal, logró que los diputados liberales permitieran poner en marcha un agresivo plan de recortes a diversos rubros del gasto social para el periodo 2007-2008, además de una serie de reformas políticas en materia de migración y refugio conocidas como *Bill C-50* y *Bill C-31*, respectivamente.

²⁴ Todas las estadísticas y cifras que se señalarán a continuación —referentes a los procesos electorales canadienses— se obtuvieron en Elections Canada (2016).

Lo anterior fue posible una vez que decidieran ausentarse de la votación final 91 de los 103 MP liberales, cifra que dejó el camino libre para que los 114 diputados conservadores superaran a los 83 neodemócratas y del Bloque Quebequense, para finalmente aprobar tales leyes. El argumento esgrimido por la dirigencia liberal fue que ellos no iban a provocar un cierre parlamentario por tercera ocasión en cinco años para convocar a nuevas elecciones, ya que la gente estaba cansada de eso (Campion-Smith, 2008).

De esta manera, la estrategia de Stephen Harper para poder gobernar y aprobar leyes desde un gobierno minoritario consistió en presionar y chantajear al maltrecho Partido Liberal, responsabilizándolo de un llamado anticipado a elecciones, algo que los liberales evitaban en esos momentos dados sus pobres números de aprobación frente a la opinión pública. De este modo, la destreza legislativa del primer ministro consistió en presentar reformas conservadoras polémicas en la Cámara de los Comunes con la certeza de que serían aprobadas por la acción u omisión de los miembros liberales del Parlamento y su temerosa dirigencia. Todo esto demostró que Harper había aprendido muy pronto a ganar batallas parlamentarias sin siquiera pelearlas, acción que al mismo tiempo les arrebató a los liberales el corazón, el alma y el orgullo (Dryden, 2010: 100-101).

A partir de esta acción, Harper consiguió desvelar algunos de los vicios existentes en el sistema político canadiense, que como se ha visto mantiene añejas estructuras y una serie de hábitos de acción parlamentaria que se resisten al cambio. En este sentido, otra de las razones que podría explicar el mantenimiento de este sistema es la medida con que sus primeros ministros suelen conducirse, ya que ciertamente pocas son las ocasiones en que el sistema ha sido amenazado por sus propios gobernantes, quienes regularmente privilegian los tradicionales acuerdos liberales-conservadores para no entorpecer la praxis política y la propia gobernabilidad.

Empero, estos hábitos civilizados de la tradicional política canadiense, conocidos como *responsible government* (gobierno responsable),²⁵ se cimbraron con la llegada de un personaje enormemente pragmático y con un profundo conocimiento de los tiempos parlamentarios y electorales, cuya mejor expresión se demuestra en sus constantes llamados electorales adelantados para afianzarse en el poder.

²⁵ Se entiende como “gobierno responsable” al ejercicio de poder que recae en el primer ministro en turno, el cual de acuerdo con las leyes constitucionales canadienses, como titular del Ejecutivo, es el responsable de la administración y de todo el Parlamento.

En este sentido, entender la forma en que Stephen Harper logró mover la maquinaria parlamentaria en su favor para beneficiarse él mismo pasa de manera forzosa por el análisis de las elecciones federales de 2008 y 2011. En ambas se expresó su maestría en el manejo de los tiempos políticos, al beneficiarse sin rubor alguno de las áreas de oportunidad que presenta el parlamentarismo canadiense, el que durante el mandato de Harper se evidenció con instrumentos limitados para frenar los excesos personales de su primer ministro, tal y como se apreciará enseguida.

Una vez consolidada su fuerza, tras aprobar una serie de reformas en el periodo 2007-2008, Harper se propuso afianzar su posición al interior de la Cámara de los Comunes, pues el suyo, pese a los éxitos obtenidos, todavía era un gobierno de minoría y, por lo tanto, expuesto a la censura de la mayoría opositora en cualquier momento. Por ello, mantener la discordia entre sus rivales era un tema de vital importancia para su gestión, y para alcanzar esa meta se valió de todos los recursos a su alcance; sin embargo, el tiempo iba agotándose en su contra, ya que los gobiernos minoritarios suelen durar en Canadá alrededor de dos años y medio en promedio, por lo cual 2008 se planteaba como un potencial año electoral.

Ahora bien, si en efecto es cierto que la actividad parlamentaria permitía abrir camino para convocar a elecciones adelantadas en dicho año, las reformas puestas en marcha desde el inicio de su gestión le dificultaban solicitar un proceso anticipado, ya que él mismo se había comprometido a no convocar a comicios desde el poder. Ante esta realidad, puso en marcha una estrategia en la que responsabilizaba a la oposición de la falta de resultados en su gobierno. Y es que ciertamente existía una profunda división parlamentaria entre los opositores (Partido Liberal, Partido Neodemócrata y Bloque Quebequense), los cuales, si bien eran mayoría en el Parlamento, no lograban establecer una agenda común frente al gobierno de Harper que, de manera casi imperceptible, fue ganando terreno y prestigio entre amplios sectores del electorado.

Al final esta falta de consenso entre la oposición fortaleció al gobierno conservador, que aprovechó la coyuntura de crisis económica internacional en 2008 para adelantar las elecciones federales, con el argumento de la falta de acuerdos parlamentarios para encarar los escenarios económicos caóticos del momento. Por ello, Harper planteó ante la gobernadora general, Michaëlle Jean, su solicitud para disolver el Parlamento y convocar a un nuevo proceso electoral, con el fin de reconfigurar la Cámara de los Comunes y así

salvaguardar los intereses canadienses de cara a un mundo afectado por la crisis mundial originada por la quiebra inmobiliaria en Estados Unidos.

Con esta acción, Harper no sólo adelantó las elecciones federales en octubre de 2008, sino que además le dio un golpe contundente a la oposición que, incrédula, atestiguó cómo el primer ministro rompía su promesa de no adelantar elecciones desde el poder, y no sólo eso, sino que se perfilaba para alcanzar un gobierno de mayoría. En realidad esta estrategia casi resultó perfecta, de no ser porque se quedaría a tan sólo doce asientos de alcanzar el 50 por ciento más uno después de pasar de 124 a 143 curules.

Así, a partir de la puesta en marcha de las actividades legislativas en noviembre de 2008, esos doce asientos se convirtieron en un grave problema para el gobierno de Harper, ya que al romper su compromiso de no convocar a comicios anticipados desde la primera magistratura, la oposición por fin empezó a encontrar elementos para lograr acuerdos parlamentarios; no obstante lo dicho, es necesario mencionar que pese a la evidencia del acuerdo no respetado por Harper, el ambiente internacional también contaminó el ánimo de los electores canadienses, que incrédulos y temerosos preveían la quiebra de numerosas empresas estadounidenses y la posible contaminación del mercado canadiense.

De esta manera, frente a una sociedad dominada por el temor por la quiebra inmobiliaria de Estados Unidos y sus efectos en el resto del mundo, el primer ministro buscó mostrarse como el único personaje capaz de evitar que Canadá cayera en la vorágine de la crisis internacional, y no sólo eso, sino que además ofrecía alternativas de crecimiento apoyándose en la explotación de los recursos energéticos del país. Como parte de esta estrategia, presentó ante la Cámara de los Comunes una serie de propuestas encaminadas a disminuir impuestos a la ciudadanía, pero al mismo tiempo tales iniciativas afectaban a los partidos políticos de toda la oposición, ya que buscaban reducirles los subsidios gubernamentales y los obligaba a buscar recursos vía recaudaciones de particulares.

Esto sin duda colocó a los opositores en un lugar extremadamente vulnerable, ya que no contaban con la sofisticada maquinaria recaudadora conservadora. Aunado a lo anterior, el gobierno conservador intentaba poner en marcha un ambicioso plan de reformas laborales que limitaban el derecho de huelga en la burocracia. Frente a esta serie de planteamientos, el Partido Neodemócrata, en voz de su líder Jack Layton, propuso a su contraparte liberal Stéphane Dion

la conformación de un gobierno de coalición para sustituir a Harper. Como respuesta, éste canceló las propuestas en el Pleno de la Cámara baja, pero el mecanismo para su destitución ya había arrancado.

De este modo, en un hecho histórico para Canadá, el 1° de diciembre, a menos de dos meses de las elecciones previas, los líderes del Partido Liberal, el Partido Neodemócrata y el Bloque Quebequense anunciaron su voto de censura en contra del gobierno de Harper y, al mismo tiempo, la conformación del primer gobierno coaligado en la historia del país. En éste, los liberales accederían a dieciocho ministerios y los neodemócratas a seis. Los partidos involucrados se comprometían a convocar a elecciones en un término de dos años y medio, esto es, en junio de 2011 (CBC News, 2008). Por su parte, el Bloque Quebequense acordó no interferir con el funcionamiento de esta administración durante año y medio. Cabe añadir que esta coalición gubernamental entraría en vigor hasta el 8 de diciembre, una vez que la gobernadora general regresara de una gira de trabajo por Europa.

Ante este anuncio, Harper emitió un mensaje televisivo en el que acusaba a la oposición de pretender usurpar el poder después de un proceso democrático. Afirmaba que si bien en el pasado la conformación de Canadá se había alcanzado gracias a la coalición de hombres ilustres de distinta filiación, en ese momento el intento opositor se constituía más bien en una imposición ilegítima que atentaba contra la ciudadanía, que ya había expresado su opinión dos meses antes en unas elecciones democráticas. Asimismo, dejaba en claro que él, como primer ministro, haría todo cuanto estuviese a su alcance para “defender la democracia y la economía” de todo Canadá.²⁶ Este discurso estaba cargado de una serie de simbolismos que se ofrecían como recursos para mantener las tradiciones políticas vigentes. El principal objetivo era evitar a toda costa la conformación de un gobierno de coalición, calificándolo como un intento antidemocrático, cuando en realidad, como se ha visto, es una figura bastante socorrida en el resto del mundo político anglosajón.

De tal modo, y como él mismo lo advirtió, en una maniobra que sigue despertando suspicacias, la gobernadora general, Michaëlle Jean, adelantó su regreso a Canadá y en una reunión secreta recibió al primer ministro Harper, quien le pidió prorrogar el Parlamento aprovechando el fin de año, y así darle

²⁶ El mensaje completo puede verse en YouTube: “Harper Addresses Canadians on Proposed Coalition, Dec. 3rd”.

tiempo para elaborar un nuevo proyecto presupuestario para el ejercicio 2009 que contemplara reducciones de impuestos. De forma por demás polémica, Jean aceptó dicha propuesta y decretó una prórroga parlamentaria hasta finales de enero de 2009, ateniéndose a la segunda regla de prudencia, que dicta: “Los poderes discrecionales del gobernador general están disponibles y deberán usarse para resolver cualquier *impasse* constitucional al que se enfrente un gobierno de minoría después de unas elecciones federales generales” (McWhinney, 2005: 169).

Así, apoyándose en esta segunda regla de prudencia, la gobernadora general desautorizó el gobierno de coalición programado por la oposición, ya que en el sistema Westminster ningún gobierno puede entrar en operaciones con un Parlamento cerrado por orden directa del representante de la Corona. De esta forma, la oficina de Jean jugó su papel protagónico en uno de los capítulos más polémicos y turbios de la historia política canadiense contemporánea.

Lo más grave fue que con su acción, Michaëlle Jean no sólo cerró el Parlamento y desbarató un gobierno concertado por los tres partidos políticos opositores al Conservador, sino que además fue parte activa de un complot elaborado desde las oficinas del primer ministro, en una acción que bien podría definirse como un autogolpe de Estado, al cerrar un Parlamento con mayoría opositora para mantener a toda costa en el poder a la administración en funciones. Con esta estrategia, Harper logró aferrarse al poder en una acción que podría calificarse de legal, pero que es indebida, sobre todo porque entre sus justificaciones para permanecer en el cargo sobresalían aquellas en donde afirmaba que el gobierno de coalición propuesto por la mayoría opositora era en realidad un golpe de Estado dirigido por separatistas y socialistas (Gidluck, 2012: 197).

En medio de todos estos acontecimientos, uno de los protagonistas, el neodemócrata Brian Topp, quien fungiera como operador y enlace para concretar el anuncio de este primer gobierno coaligado para Canadá, llegó a afirmar poco después de su desarticulación lo siguiente: “Los eventos de noviembre de 2008 nos enseñaron que la oficina del gobernador general no es garantía para nuestra democracia parlamentaria, y que la Cámara de los Comunes necesita de manera urgente tomar los pasos necesarios para defender su papel central en nuestro sistema de gobierno” (Topp, 2010: 184).

Al mismo tiempo del cierre temporal parlamentario orquestado desde las altas cúpulas del poder en Canadá, al interior del Partido Liberal se orquestó

una rebelión dirigida por las esferas más poderosas del partido para remover a su líder, Stéphane Dion, tras cuestionarlo por su escasa habilidad y profesionalismo durante el proceso para concretar el gobierno de coalición. Era claro que nadie tenía la culpa en particular, pero Dion, como líder del partido, era a quien se quería responsabilizar de lo ocurrido (Trudeau, 2014: 227).

No obstante, en realidad lo que le reprocharon las elites liberales fue su decisión de pactar con la izquierda neodemócrata sin haber solicitado el visto bueno de los jefes del partido. Y es que en realidad estos últimos observaban con desdén la posibilidad de cogobernar con un partido que había venido cuestionando muchas de las viejas prácticas parlamentarias y de gobierno en Canadá, como lo es el Partido Neodemócrata que, deberá recordarse, ha insistido desde hace décadas en renovar las prácticas parlamentarias canadienses y reformar su operatividad. Un ejemplo de ello es su insistencia en suprimir el Senado debido a su limitada utilidad.

Por esta razón Dion fue empujado a renunciar a su cargo, y en su lugar se impuso a un académico neoconservador descendiente de la aristocracia zarista, Michael Ignatieff, quien de inmediato desconoció la alianza para formar un gobierno coaligado con el NDP, al calificarla como ilegítima e impulsada por perdedores (Ibbitson, 2015: 288). Lo anterior significó el reconocimiento *de facto* del gobierno conservador de Harper, lo que se expresó a través del apoyo parlamentario liberal, cuyos representantes votaron en favor del nuevo proyecto presupuestal de 2009. Lo anterior permitió al primer ministro continuar con su gestión.

Quizá lo más trascendente para la segunda administración de Harper fue no tanto el apoyo liberal al ejercicio presupuestal mencionado, sino más bien el grave distanciamiento entre la fracción liberal respecto de los MP neodemócratas y del Bloque Quebequense, ya que pese a ser mayoría, tales partidos no lograrían unificar posturas y constituirse en una amenaza seria para el minoritario Partido Conservador en el poder. Lo anterior se acentuó una vez que la dirigencia neodemócrata afirmara irónicamente que, pensándolo bien, sí existía una coalición gobernante en el Parlamento canadiense, la conformada entre liberales y conservadores (Lavigne, 2014: 174).

En este contexto de división opositora, Harper buscó el apoyo parlamentario del Partido Liberal para extender la misión militar canadiense en Afganistán más allá de 2008, extensión que por cierto contravenía lo establecido previamente por las administraciones liberales en el poder pocos años antes.

Al respecto, el Partido Neodemócrata insistió en respetar los plazos convenidos y acordados por todos los partidos en el documento original, manifestando así su inconformidad con prolongar las operaciones de personal militar canadiense en dicho país.

Resulta necesario señalar que el tema de la extensión de operaciones militares canadienses en Afganistán se convirtió en un asunto prioritario para Harper, ya que él mismo lo utilizó para propagar la narrativa de que Canadá era un país con una amplia trayectoria de operaciones militares en el exterior, basada tanto en el heroísmo de sus fuerzas armadas, como en el valor de sus ciudadanos, quienes no verían con orgullo cómo su primer ministro decidía claudicar y cancelar los compromisos con sus aliados en territorio afgano (Gutsten, 2014: 229).

No obstante la polémica generada al interior de la Cámara de los Comunes, al final las negociaciones entre el liderazgo liberal y el primer ministro conservador permitieron al gobierno de Harper extender la misión canadiense con el aval parlamentario gracias a la adhesión de los liberales, pues debe recordarse que hasta ese momento el Partido Conservador no contaba aún con la mayoría legislativa para aprobar leyes sin necesidad de negociar con otras fracciones. Debe insistirse en que esta decisión contrastó con la postura neodemócrata, cuya dirigencia se pronunció por repatriar a todo el personal militar desplegado en Afganistán debido al elevado número de bajas canadienses que venían registrándose semana tras semana por aquellos años.

Empero, esta dinámica de cooperación entre liberales y conservadores se rompería en 2009, a partir de que el primer ministro ignoró de manera sistemática las solicitudes liberales por aclarar las cuentas públicas. Por ello, el Partido Liberal buscó el apoyo parlamentario neodemócrata para derribar al primer ministro y así adelantar las elecciones federales; sin embargo, en esta ocasión fue el Partido Neodemócrata el que decidiría no sumarse a la iniciativa, ello tras lograr un incremento en el apoyo gubernamental para los desempleados en el país debido a la crisis global de 2008-2009. Así, tras las mencionadas negociaciones parlamentarias con el Partido Conservador, los diputados neodemócratas resolvieron abstenerse en las votaciones al interior de la Cámara de los Comunes, dejando sin el número necesario de sufragios a la iniciativa de los liberales, quienes sólo contaron en ese momento con el apoyo del Bloque Quebequense.

La postura asumida por el líder liberal Michael Ignatieff fue considerada soberbia y arrogante por parte del NDP, ya que afirmaban que había lanzado

su propuesta de voto de censura en contra del primer ministro sin siquiera consultar a las otras fracciones de la oposición, asumiendo que los otros partidos iban a sumarse. En realidad, esta falla del liderazgo del Partido Liberal reveló la poca habilidad y conocimiento de Ignatieff, ya que desde una minoría parlamentaria tiene que considerarse siempre detenidamente a cada uno de los oponentes para lograr así imaginar qué piensa cada uno y cómo reaccionarían ante este tipo de propuestas (Lavigne, 2014: 182).

Debido a su poca pericia, a partir de este revés parlamentario el liderazgo liberal menguó al interior de la Cámara de los Comunes, al tiempo en que el gobierno conservador fortalecía cada vez más su posición; sin embargo, el tema de Afganistán seguiría atrayendo la atención en Canadá, sobre todo por los informes de grupos de la oposición en el Parlamento, que señalaban posibles casos de tortura por parte de personal militar canadiense en la nación asiática. Esto volvió a colocar al gobierno conservador en el centro del debate nacional, ya que la oposición mayoritaria lo acusaba de ocultar información debido a su contenido y gravedad.

De este modo, el tema de las presuntas torturas por parte de militares canadienses en Afganistán se convirtió en otra amenaza para la continuidad del gobierno minoritario de Harper, que si bien había logrado con éxito dividir a la oposición, la sorpresa que causaron entre la opinión pública los señalamientos de acciones indebidas por parte de la milicia canadiense y la forma en que el gobierno conservador había ocultado tal información, dejaba a Harper sin muchos márgenes de maniobra. Por ello, previendo una posible convocatoria adelantada a elecciones, el primer ministro decidió prorrogar el Parlamento por segunda ocasión, esta vez con el argumento de la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno Vancouver 2010. Esta prórroga fue avalada de nueva cuenta por la gobernadora general, quien le otorgó el tiempo necesario a Harper para negociar por separado el asunto de Afganistán con los líderes de la oposición, solicitándoles discrecionalidad absoluta como condición para revelarles todos los documentos que involucraran las operaciones militares canadienses en dicho país.

Este nuevo capítulo separó aún más a la oposición parlamentaria, pues los liberales y el Bloque Quebequense decidieron acceder a las condiciones del gobierno para conocer los detalles de las acusaciones de tortura, no así el Partido Neodemócrata, que desde el principio rechazó cualquier tipo de condición para hacer pública la información.

Esta nueva fractura entre la mayoría opositora al interior de la Cámara de los Comunes fue generando condiciones favorables para que el Partido Conservador pudiera aspirar a ganar la mayoría en unas nuevas elecciones federales anticipadas. El problema radicaba de nueva cuenta en que el primer ministro no estaba dispuesto a asumir el costo político de adelantar de nuevo un proceso electoral. Por ello, en una nueva estrategia decidió provocar a la oposición para que ellos fueran los que lo solicitaran. La forma en que logró hacerlo fue a través de sus negativas constantes a revelar los fondos destinados al gasto de defensa, argumentando que éstos eran temas que involucraban la seguridad nacional y que, por ello, en su calidad de comandante de las Fuerzas Armadas, el primer ministro no estaba en posibilidades de revelar tal información.

De esta manera, ante las negativas constantes por parte de Stephen Harper, la mayoría opositora no tuvo otra alternativa que emitir un voto de falta de confianza en contra de su gobierno, ello pese a que todas las encuestas colocaban al Partido Conservador en una posición inmejorable para obtener finalmente la mayoría parlamentaria. Así, en el proceso electoral de mayo de 2011 los conservadores, con Harper al frente, consolidaron su posición como partido dominante en el escenario político tras alcanzar por fin un gobierno de mayoría, al obtener 166 de los 308 asientos en disputa. A partir de ese momento, y ya sin frenos parlamentarios de por medio en la Cámara de los Comunes, el gobierno puso en marcha una serie de reformas de alcance nacional, así como una agenda más protagónica a nivel internacional.

Aquellas incluyeron recortes presupuestales federales, cuyas consecuencias se dejaron sentir en diversos ramos sociales y de salud. Posteriormente, los escándalos en el Senado concentraron la atención de la opinión pública entre 2012 y 2013, a partir de que se dio a conocer que diversos legisladores de extracción conservadora habían incurrido en actos de corrupción. Estos hechos fueron creciendo al involucrar de manera directa al primer ministro y a diversos colaboradores cercanos.

El nivel de escándalo que se generó por las acusaciones de desvío de recursos entre senadores de extracción conservadora ciertamente menguó la buena imagen del primer ministro, pues la atención mediática hacia el hecho fue constante y se transformó en un asunto de falta de ética al interior de su gobierno. De este modo, y aprovechando el mal momento conservador, el Partido Neodemócrata, en su papel de principal partido de oposición, presionó a Harper para que explicara con claridad, ante la opinión pública, qué

había sucedido con los desvíos en el Senado, y no sólo eso, sino que exigió a través de su líder, Thomas Mulcair, una rendición de cuentas y transparencia en los fondos públicos, al mismo tiempo en que culpó a Harper de ser el responsable de toda la situación por haber fomentado una cultura de la corrupción en su partido (*Global News*, 2018).

Esta presión política y la insistencia opositora de incluir el tema en los debates de la Cámara de los Comunes llevaron finalmente al primer ministro Harper a prorrogar por tercera ocasión el Parlamento, en septiembre de 2013, argumentándole en esta ocasión al nuevo gobernador general, David Johnston, la necesidad de reorganizar el presupuesto público para presentarlo a inicios del mes siguiente durante el Discurso del Trono. En esta oportunidad la oposición neodemócrata señaló que esta nueva prórroga buscaba fundamentalmente evitar el periodo de preguntas y respuestas en las siguientes sesiones de la Cámara baja, para eludir así la exposición mediática del primer ministro ante tan severas acusaciones. Por ello, en una carta abierta a la opinión pública, el entonces líder de la oposición, el neodemócrata Thomas Mulcair, afirmó: “Stephen Harper está estableciendo nuevos récords de prórrogas para evitar la rendición de cuentas. Él debe dejar de esconderse y llamar ahora mismo a reanudar labores en el Parlamento para hacer frente a las preguntas de los representantes del pueblo” (CBC News, 2013).

El resultado ciertamente benefició a Harper en el corto plazo, ya que congeló de un solo golpe todo el debate público respecto del desvío de dinero de sus senadores en la Cámara alta. De este modo, el recurso de la prórroga parlamentaria fue utilizado como un método efectivo de supervivencia política por su parte. Empero, lo más interesante de esta tercera y última fue que la solicitó desde un gobierno de mayoría con el claro objetivo de atemperar los ánimos y darle un poco de respiro a su administración para enfrentar los nuevos retos políticos que se avecinaban, los cuales, por cierto, muy pronto encontraron el cauce para atrapar la atención pública.

Fue así como a través de todo tipo de estrategias legales, Harper aprovechó las herramientas sistémicas del parlamentarismo para mantenerse en el poder, valiéndose para ello de todos los recursos a su alcance. Quizá algo de lo más trascendente es que fue, sin duda, uno de los primeros ministros que mejor supo aprovechar los resquicios y la rigidez del sistema para conservar el cargo. Aquí el problema es que el sistema político de Canadá fue fundado con el objetivo de lograr consensos, con base sobre todo en la buena voluntad,

en un ejercicio conocido como *responsible government*, el cual al mismo tiempo expresa un abierto respeto a sus añejas instituciones por parte de los gobernantes en turno.

Lo anterior se manifiesta a través de una serie de ejercicios y prácticas que han llevado a cabo los tradicionales partidos con mayor poder en Canadá, es decir, el Liberal y el Conservador, los cuales, tras alcanzar acuerdos pragmáticos mutuos, han conseguido dar paso a una sorprendente gobernabilidad y estabilidad políticas a lo largo de más de siglo y medio.

Así, las reformas en materia de seguridad puestas en marcha en la primavera de 2015 pueden considerarse uno de los capítulos más recientes que expresan esta confluencia de intereses en favor de la gobernabilidad interna a través de la operación minuciosa y bien planificada de acuerdos parlamentarios. Todo eso comenzó un año antes con la serie de incidentes en territorio canadiense que involucraron a individuos afines a grupos terroristas del Medio Oriente, y entre los que destaca sin duda alguna el tiroteo al interior del Parlamento en Ottawa en octubre del cual ya se habló previamente.

Estos acontecimientos sirvieron para que el gobierno del primer ministro presentara un ambicioso programa de reformas en materia de seguridad, generando una gran polémica en el país por considerarlas como un amasijo enorme y draconiano que involucraba temas de seguridad nacional, además de que el mandatario buscaba, a través de una nueva prórroga parlamentaria, limitar el debate en torno a la misma (Mulcair, 2015: 175).

Sin embargo, ésta no se concretó una vez que se hizo evidente que el Partido Liberal apoyaría tal reforma. Por ello, este paquete de enmiendas al sistema de seguridad detonó acaloradas discusiones en la Cámara de los Comunes entre el gobierno y la oposición. Así, una vez aprobada por la mayoría conservadora-liberal la propuesta C-51, serviría para poner de manifiesto, una vez más, los acuerdos fácticos entre las históricas y fundadoras fracciones parlamentarias canadienses.

De este modo, es interesante saber cómo, no obstante contar con la mayoría suficiente para sacar adelante esta controvertida reforma en materia de seguridad y libertades individuales, Stephen Harper encontró la manera de sumar a su reforma a los MP liberales, colocándola como un asunto aprobado por una clara mayoría en ambas cámaras. Lo anterior tuvo la intención de desacreditar las voces en contra de la enmienda, ya que prácticamente dos terceras partes de la Cámara de los Comunes la habían aprobado, y ello le

otorgaba la legitimidad suficiente. Lo dicho, claro está, sin contar su amago de prórroga parlamentaria en el caso de percibir amenazada la concreción de su paquete de seguridad.

Para finalizar debe añadirse que las elevadas aptitudes de Harper para mantenerse en el poder, así como su claro dominio del complejo sistema parlamentario, fueron elementos que le alcanzaron para extender su mandato durante más de nueve años y medio; no obstante, más allá de la temporalidad de su gobierno, lo cierto es que Canadá se encuentra en un franco proceso de redefinición de valores, en donde el tradicional, benigno y tolerante conservadurismo se enfrenta con otro más pragmático y excluyente.

Este espíritu conservador que ha dominado las estructuras políticas desde hace muchas décadas, y que encuentra en su Parlamento un seguro cobijo, se hace presente tanto al interior del propio Partido Conservador como también en el Partido Liberal. Prueba de ello es que durante el mandato de Justin Trudeau, quien ganó la primera magistratura después de una aplastante victoria electoral en octubre de 2015, tras alcanzar 184 de los 338 asientos en disputa, hoy más que nunca los valores multiculturales, la tolerancia y la tradicional bondad canadiense se han visto cuestionados por sectores sociales que no distinguen muchas variantes entre los planes de gobierno del conservador Harper y el liberal Justin Trudeau. La razón parecería obedecer a que ambos gobiernos parecen venir mimetizándose sin grandes dificultades en una considerable variedad de temas, ya que el estilo atractivo y relajado de Justin Trudeau, y el estilo parco y áspero de Stephen Harper se conjugan cuando así conviene a los grandes intereses canadienses, los cuales bien pueden identificarse tanto al interior del país entre sus elites, como en el exterior a través de sus corporativos empresariales.